

No a la guerra es decir sí a las libertades Y no al rearme y a la OTAN

EDITORIAL

Más que nunca ¡No a la guerra!

Dicen que la historia no se repite, o, al menos, de la misma forma, pero hay acontecimientos políticos que marcan la historia y las vivencias de toda una generación. Las movilizaciones de millones en el año 2003 contra la intervención del gobierno de la Monarquía, tras del imperialismo USA, en la guerra contra Iraq. Movilizaciones que arrastraron a todas las organizaciones obreras y populares y que forman parte de estos acontecimientos. Que, además, prepararon la derrota -contra las encuestas- del gobierno Aznar el 14 de marzo de 2004.

No a la guerra no es propiedad de ningún partido, ni de ningún gobierno. Es la expresión que concentra todas las aspiraciones de paz, libertad y justicia de la mayoría de nuestros pueblos. Lo fue en 2003 y lo es hoy, porque hoy, también, la inmensa mayoría de los ciudadanos y trabajadores de este país se oponen a la guerra.

No a la guerra significa basta ya de genocidio al pueblo palestino, de destrucción del Líbano, de Siria, de Jordania. Significa, por tanto, romper todas las relaciones con la entidad genocida de Israel. No a la guerra significa basta ya de intentar aniquilar una civilización milenaria como es y será Irán. Tiene razón el gobierno Sánchez cuando rechaza toda participación en esta guerra.

No a la guerra significa basta ya de intentar someter a todos los pueblos de América Latina, al bloqueo impuesto al pueblo hermano de Cuba, al sometimiento de Venezuela y el secuestro de su presidente.

No a la guerra supone, al mismo tiempo, no a la guerra social, a la guerra contra derechos, conquistas y libertades. Significa basta ya de destruir la industria en nombre del rearme, basta ya de multiplicar los gastos militares en detrimento de las necesidades de escuelas, hospitales, vivienda, infraestructuras. Y significa dejar ya de alimentar la guerra de Ucrania enviando armas en vez de propugnar una salida negociada entre Rusia y Ucrania sin ninguna injerencia.

No a la guerra es decir fuera las bases y la OTAN. No a la guerra significa no a políticas autoritarias, al desprecio de las libertades, a la Ley Mordaza y a la Ley de Extranjería.

No a la guerra es decir sí al aumento de salarios y pensiones, acabar con el trabajo precario, y acabar con las ganancias fabulosas de las grandes empresas.

No a la guerra significa recuperar como propiedad pública eléctricas, energéticas, banca...

No a la guerra significa tender la mano a los pueblos de Europa y del mundo para abrir camino a la acción común y fraternal entre todos los pueblos en una lucha común contra toda explotación y opresión.

No a la guerra es hoy, junto con los compañeros de STOP THE WAR y militantes de 24 países europeos, preparar una movilización común en toda Europa contra la guerra y la política de austeridad que los gobiernos anuncian.

No a la guerra significa preparar la participación de una amplia delegación de todos los pueblos del Estado a la Conferencia y Mitin internacionales contra la guerra, que se celebrará los días 19 y 20 de junio en Londres.



Valencia 21 de marzo, manifestación unitaria de organizaciones populares, partidos, sindicatos

Luchas obreras

página 3



Preparando la conferencia y el mitin de Londres

página 6



No es una guerra, es intentar aniquilar pueblos y civilizaciones

página 10



Romper el bloqueo a Cuba

página 12



Pretenden salvar al soldado Mazón

En contradicción con la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y la exposición razonada de la jueza de Catarroja, y de todos los hechos suficientemente probados, la Sala de lo Penal del TSJ-CV, por unanimidad, afirma que Mazón no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido porque el Mando Único lo ostentaba la consejera de Justicia, Salomé Pradas, repitiendo así los argumentos utilizados para exculpar a Camps en el caso Gürtel.

Según el TSJ-CV, a la exposición de la jueza le faltan «indicios fundados y serios y una imputación clara y concreta con suficiente apoyo probatorio» y no se encuentra en ella «una relación de causalidad concreta y precisa entra cada fallecimiento y la actuación de la Generalitat el día 29 de octubre de 2024».

Argumenta todo esto para afirmar que está fuera de su alcance jurídico valorar la conducta de Mazón «desde un punto de vista moral o político», que «incluso si fuera reprochable, no necesariamente ha de tener encaje en un precepto penal».

El TSJ no ve lo que no quiere ver

El Tribunal rechaza la mayor: Mazón no es responsable de nada, toda la responsabilidad recae sobre Pradas, la consejera al mando del CECOPI el día que la negligencia del Gobierno

Valenciano (Consell) causó 230 muertes evitables; tampoco hay relación directa entre los homicidios y lo que estuviera haciendo Mazón ese día. Redondo.

Ninguna de las pruebas o «indicios» aportados por la jueza instructora merecen ser tomadas en consideración. No hay nada que investigar.

La Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre ha recurrido esta decisión (ver página 10).

Assumir la causa e investigar a Mazón, competencia exclusiva del TSJ, y exculparlo, supondría aumentar el desprestigio del aparato judicial franquista y una reacción en contra del pueblo valenciano de consecuencias imprevisibles. Aún no andan las aguas tranquilas para librar al expresidente, y a todo su gobierno con él, de la condena por el homicidio masivo. Más prudente, el TSJ, decide que Mazón es inocente y devuelve la causa al Tribunal de Catarroja para que siga buscando pruebas «fundadas y serias» para imputar al expresidente.

La instrucción sigue y la lucha para que Mazón pague sus crímenes también

La jueza se ha mostrado diligente y ha llamado a declarar como testigos a Mazón, al que pide «aportar volun-

tariamente sus mensajes de wasap y las llamadas del 29 de octubre de 2024», a la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, y a la vicepresidenta Susana Camarero, a alcaldes de las poblaciones afectadas, a los que solicita que aporten sus llamadas y mensajes de ese día, y una prueba caligráfica a Pradas para evaluar el texto manuscrito que entregó al técnico de Emergencias Jorge Suárez, en el que recomienda que se «evite el desplazamiento» en la provincia de Valencia y «permanezcan en sus casas», con la palabra confinamiento tachada, en el que también pedía a la población «alejarse de los cauces y elevarse a mínimo una 1.ª planta».

Este escrito parece que lo entregó Pradas a Jorge entre 18:30 y las 19:45, hora en que el técnico lo guardó, cuando se decidió enviar el ES-Alert que no alertaba de nada y que finalmente salió a la 20:11, cuando la tragedia ya era irreversible.

El auto del TSJ, que no ve delito en la actuación de Mazón, sirve para que el PP defienda la inocencia del muy miserable Mazón y ponga en marcha todo el aparato represivo y propagandístico contra quienes exigen su imputación, y para que Mazón siga boicoteando la instrucción judicial, usando todas las triquiñuelas posibles: personarse en la causa, recurrir la decisión de la jueza de no aceptar su personación, y todo lo que esté en sus manos, en las del aparato judicial y en las de su partido.

El PP ha borrado todas las pruebas que ha podido, pero Pradas la guarda en su teléfono. Ahora falta saber si se atreverá a ponerlas en manos de la jueza Nuria Ruiz. La venganza del PP por esto podría salirle demasiado cara. Si Rita levantara la cabeza...

Però la inmensa mayoría del pueblo valenciano sabe que las 232 víctimas son asesinatos de los que son responsables Mazón y su Consell, incluyendo a Pérez Llorca. Indudablemente, la movilización continuará hasta que se haga justicia y paguen los responsables, hasta que Mazón abandone su escaño. ¡Basta ya de impunidad!

Blas Ortega

Kitchen: la cocina del PP

No todas las corrupciones son igual. La traición que encierra cada una es distinta. En este caso un gran partido político, que tiene raíces en todos los órganos del Estado, ha utilizado ese poder para organizar una Policía suya, al servicio de ese partido. El objetivo de esa Policía particular era sabotear el trabajo policial para impedir que llegasen a conocimiento de los jueces las trampas que ese partido había hecho en beneficio propio, en particular utilizando una caja B, clandestina.

Cuando se supo, el presidente de ese partido, el PP, Mariano Rajoy, fue descabalgado del Gobierno por el Congreso de los Diputados, a iniciativa de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional procede ahora a organizar la vista oral para juzgar a algunos de los implicados, no a todos. Los implicados son sobre todo la cúpula policial y policías del Gobierno de Rajoy encabecados por quien fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.



Este juicio

Juzga el espionaje del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El PP se encontraba acorralado por las revelaciones de la situación aportando nuevos datos.

El ministro Fernández Díaz recabó la colaboración de algunos policías para evitar que esto sucediese robándole documentos a Bárcenas. Investigaron el entorno de Bárcenas, consiguieron como confidente el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, que alguno de los implicados señaló que repartía papeles, siendo la cocina (kitchen) del caso.

Los que no están

El juez instructor del caso, García-Castellón, limitó la responsabilidad del espionaje al Ministerio del Interior, a su cúpula. La Fiscalía Anticorrupción quiso extender las pesquisas a la cúpula del PP, en concreto a Dolores de Cospedal, que fue secretaria general.

El juez se negó a extender la investigación a la cúpula del PP. La Fiscalía considera que el juez cerró en falso la instrucción.

La Sala de lo Penal aprobó el informe del instructor. Con lo cual la magistrada Palacios, que preside la vista oral, no ha podido dictar una investigación complementaria. El resultado es que ni Rajoy, ni Cospedal, ni el PP estarán entre los acusados.

Però son testigos la propia Cospedal, así como Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, Javier Arenas, ministro, y la familia Bárcenas.

Y la instrucción ha acreditado que había una caja B del PP y ha citado como testigos a la plana mayor del PP.

Juicio encorsetado y controlado

Fernández Díaz y las defensas intentaron que el juicio no se celebrase, tumbando las pruebas, sin entrar en el contenido, remitiendo el caso a los tribunales comunes. El Tribunal rechazó esas pretensiones, apoyándose en la Fiscalía.

Con lo cual el juicio es inaceptable para el PP, pues manifiesta la actuación ilegal del mismo, pero no permite sacar a la luz todo el dispositivo del PP.

De entrada, la celebración del juicio evidencia que el PP tiene raíces en todo el aparato franquista del Estado. La Policía, en este caso, ha corrido a socorrer al PP, representante político del aparato franquista, que se veía cuestionado por las revelaciones del caso Gürtel.

La Sala de lo Penal en pleno ha intervenido para apoyar al instructor de modo que el tribunal no investigue la responsabilidad del PP en las investigaciones a Bárcenas. Veremos las nuevas revelaciones que nos presta la vista oral. Así funcionan, hasta el día de hoy, los diversos componentes del aparato franquista de Estado, protegidos por este régimen.

Andoni Zarra



Notas para comprender el caso Ábalos

¿Cuál es el núcleo de la cuestión?

Las mordidas: el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión, empresa representada por Aldama, los contratos públicos del Ministerio de Transportes para comprar mascarillas en plena pandemia. En concreto, se analizan dos contratos: uno que otorgó Puertos del Estado para adquirir 8 millones de mascarillas por 24 millones de euros y otro de Adif para hacerse con 5 millones de unidades por 12 millones.

Esta macrocausa se ha subdividido en 4 piezas separadas que seguirán su periplo judicial.

1. La trama principal de compra de mascarillas: Es el núcleo original, centrado en la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del Ministerio de Transportes, Adif y Puertos del Estado, adjudicadas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.

2. La pieza de los contratos de obra pública: Esta causa investiga las presuntas comisiones ilegales ("mordidas") recibidas por la trama a cambio

de amañar contratos de obras públicas, adjudicados a empresas como Acciona, entre otras, según la investigación de la UCO.

3. Presunta financiación irregular y blanqueo (PSOE): El juez investiga el posible desvío de las comisiones ilegales hacia el PSOE y pagos en efectivo, centrándose en el supuesto blanqueo de capitales a través del entorno de los implicados y el paso de gastos por el partido.

4. Expansión de la trama y nuevas empresas: La investigación se ha ampliado a otros cuatro contratos con nuevas empresas por presuntos pagos irregulares para la adjudicación de obra pública.

Los presuntos implicados

Koldo García, bilbaíno asesor y mano derecha de José Luis Ábalos. Imputado en la misma causa.

José Luis Ábalos Meco, valenciano y ministro de Fomento del 2018 al 2021, también denominada posteriormente de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y secretario de organización del PSOE del 2017 al 2021. No aceptando la dimisión exigida por

el PSOE, se pasó al grupo Mixto; actualmente se encuentra suspendido por el Congreso.

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado: Madrileño, empresario de

sectores como inmobiliario, publicidad y tecnología. Hermano de un escolta del exministro José Luis Ábalos, utilizando su cercanía para acercarse al PSOE, actuó como intermediario en la

adjudicación de contratos públicos durante el COVID-19.

Otros implicados En total son 20, entre los que se debe incluir Santos Cerdán.

¿Qué se está juzgando ahora?

El martes pasado se inició el primer juicio del caso Koldo centrado en la trama de las mascarillas.

¿Qué delitos se le atribuyen?

Ábalos y Koldo serán juzgados por siete delitos, entre ellos organización criminal, prevaricación y malversación, por los que afrontan peticiones de cárcel de hasta 30 años.

Aldama, en cambio, solo tiene una petición máxima de siete años de cárcel porque se le ha aplicado la atenuante de colaboración con la justicia.

¿Qué tribunal?

El Tribunal Supremo.

Sigue en nuestra página web cada lunes el desarrollo político y procesal.

Miguel González



Tubos Reunidos, ¿gestión improvisada?



La finalización del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Tubos Reunidos no ha servido para despejar las dudas que, desde el inicio del proceso, han acompañado a la actuación de la dirección de la empresa. Muy al contrario, la situación actual refuerza la preocupación existente entre la plantilla y sus representantes, al persistir una serie de elementos que apuntan a una gestión, cuando menos, cuestionable.

En primer lugar, la empresa ha presentado unas cuentas el jueves 26 de marzo con pérdidas que ascienden a 118 millones de euros, cifras de enorme gravedad que, sin embargo, carecen de auditoría. Este hecho, por sí solo, debería invitar a la prudencia, al análisis y se ve con preocupación. No obstante, lejos de aportar transparencia, la falta de verificación externa abre la puerta a dudas bastante razonables sobre la fiabilidad de dichos datos. Desde los sindicatos que representan a las personas trabajadoras en Tubos Reunidos no podemos obviar que unas cuentas no auditadas, en un contexto de reestructuración laboral, generan desconfianza y alimentan la sospecha sobre la situación económica de la empresa.

A esta incertidumbre se suma la actuación de la empresa en relación con los 80 contratos eventuales. Tal y como quedó recogido en la Inspección de Trabajo, existían al menos 42 contratos que presentaban irregularidades en su formalización y se encontraban en fraude de ley, inflando de manera indebida la temporalidad y dejando en entredicho la voluntariedad de las personas adheridas al ERE. La reacción de la empresa ante este señalamiento no

ha sido la de asumir responsabilidades de manera ordenada y transparente, sino la de proceder a una corrección apresurada y, en muchos casos, improvisada. Estas actuaciones, realizadas a contrarreloj, parecen responder más a la intención de evitar una posible declaración de nulidad del ERE en sede judicial que a un verdadero compromiso con el cumplimiento de la legalidad laboral, tal y como fue requerido directamente por la propia Inspección en la reunión mantenida en la sede de Vitoria, en la cual se encontraba la propia empresa y los representantes legales de las personas trabajadoras.

Este modo de proceder no solo evidencia una preocupante falta de planificación, sino que también refleja una gestión caracterizada por la improvisación constante, el «ir apagando fuegos» y la ausencia de criterios sólidos. La dirección de la empresa parece estar actuando a salto de mata, adoptando decisiones reactivas en lugar de seguir una estrategia clara y coherente. Este escenario resulta especialmente grave cuando las consecuencias recaen directamente sobre los trabajadores y trabajadoras, que ven cómo su futuro se ve condicionado por decisiones que generan más incertidumbre que soluciones.

Desde los sindicatos que representan a las personas trabajadoras en Tubos Reunidos consideramos que esta situación no puede calificarse únicamente como una actuación de mala fe, sino que trasciende hacia un terreno de posible irregularidad en la gestión. La acumulación de errores, rectificaciones forzadas y falta de transparencia apuntan a una dinámica de funcionamiento que resulta incompatible con la responsabilidad que debe exigirse a la dirección de una empresa de estas características.

En este contexto, los sindicatos ya están trabajando en la preparación de los correspondientes recursos contra el ERE. Entendemos que todo lo sucedido durante este proceso —desde la presentación de unas cuentas no auditadas hasta la gestión irregular de la contratación temporal— constituye un conjunto de actuaciones que podrían ser determinantes en la valoración judicial del expediente. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón de comportamiento que podría ser interpretado como un nuevo acto de mala fe, en su defecto, de una gestión clara-

mente deficiente.

Existen precedentes recientes que refuerzan esta posición. Casos como el ERE de Maderas de Llodio han demostrado que los tribunales pueden declarar la improcedencia o incluso la nulidad de estos procesos cuando se acreditan irregularidades o falta de buena fe en la actuación empresarial. Este ejemplo, aún cercano en el tiempo, evidencia que la vía judicial no solo es necesaria, sino también una herramienta eficaz para garantizar la defensa de los derechos de las personas trabajadoras.

Por todo ello, entendemos que la actuación de la actual dirección es, cuando menos, irresponsable y claramente reprochable y que consideramos tendría que tener consecuencias. No se trata únicamente de una discrepancia en la interpretación de los datos o en la toma de decisiones, sino de una forma de proceder que erosiona la confianza, pone en riesgo la seguridad jurídica del proceso y afecta de manera directa a los derechos de la plantilla.

Asimismo, esta situación vuelve a poner de manifiesto la importancia de la unidad sindical y de la acción colectiva. Solo desde la unidad, la firmeza y la determinación será posible hacer frente a este tipo de prácticas y defender con garantías los derechos laborales. La experiencia demuestra que la lucha y la unión es el camino para frenar actuaciones injustas y exigir responsabilidades a quienes, con sus decisiones, comprometen el presente y el futuro de cientos de familias.

La gravedad de los hechos y la reiteración de conductas cuestionables obligan a ir más allá de la denuncia pública. La defensa de los derechos de las personas trabajadoras exige una respuesta firme y respaldada por todos los instrumentos legales disponibles frente a una dirección cuya actuación, a día de hoy, deja mucho que desear.

Raúl Ayuso,
sindicalista UGT-Euskadi

Movilizaciones en AIRBUS

Trabajadores de AIRBUS se movilizan por subida salarial del 9% entre 2026 y 2027



La plantilla de AIRBUS se ha concentrado en la puerta de las 6 factorías que tienen en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y Sevilla (San Pablo y Tablada), el 23 de marzo para exigir a la dirección del grupo aeroespacial en España una subida salarial del 9%. No quieren perder poder adquisitivo cuando la compañía ha anunciado unos beneficios históricos de 6.000 millones de euros. En la última negociación de convenio colectivo para 4 años, quedó pendiente fijar cuál sería la subida salarial de los dos últimos años. Los sindicatos convocantes de las actuales movilizaciones y paros, CCOO, ATP y SIPA, dicen que los beneficios hay que repartirlos y para desbloquear la negociación han convocado los días 24 y 26 de marzo dos horas de paros para exigir a la dirección una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027.

El secretario general de CCOO de Industria y trabajador de AIRBUS, Fran San José, lamentó que AIRBUS se niegue a entender «algo tan sencillo y tan simple» como es repartir lo que gana entre quienes lo hacen posible, y dice que «no es de recibo», que una empresa que es titularidad del Estado (SEPI tiene un 4,2% del accionariado), y que se ha beneficiado del aumento del presupuesto de defensa y segu-

ridad, mantenga en la mesa de negociación una escuálida propuesta que ni siquiera garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo.

«No lo vamos a permitir», apuntó Alfonso Mora, secretario general de CCOO en AIRBUS y presidente del comité interempresas: «gran parte de esos beneficios entran por contratos públicos que pagamos entre todos y todas». Por lo tanto, tienen que revertir en buenas condiciones laborales, en cargas de trabajo y en buenos salarios. «Si no hay acuerdo, habrá conflicto», advierte el sindicato.

La protesta del 23 de marzo la secundaron más de diez mil personas trabajadoras de AIRBUS en las seis fábricas existentes en nuestro país. En la concentración de la factoría de AIRBUS en Getafe, la más grande de España, participaron responsables políticos como Ana González, concejala portavoz de Más Madrid – Compromiso con Getafe y teniente de alcalde del gobierno municipal, junto al diputado autonómico, Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña. Ana González dijo que: «desde Más Madrid-Compromiso con Getafe queremos mostrar todo nuestro apoyo a la plantilla y sindicatos poniendo a disposición nuestro altavoz para desbloquear las negociaciones», tras afirmar que «la empresa de AIRBUS no quiere aceptar la subida salarial propuesta por parte de las trabajadoras y trabajadores, y sindicatos, mientras obtiene beneficios récord».

Emilio Delgado, afirmó que «la democracia debe llegar también a las empresas y la macroeconomía a los salones de las casas, para ello la negociación colectiva es una herramienta fundamental para que la clase trabajadora renegocie sus salarios y no pierda día tras día poder adquisitivo. Los salarios tienen que subir».

Corresponsal

Los trabajadores de John Deere contra las sanciones

El pasado 19 de marzo a las 10:00 se celebró una concentración en la puerta de la fábrica de John Deere en Getafe (Madrid), a iniciativa del Comité de Empresa, para exigir a la dirección la retirada de la falta muy grave impuesta a 5 delegados sindicales y miembros del Comité de Empresa de CCOO.

La empresa justifica la apertura de los expedientes debido a una falta de entendimiento el día 22 de enero, entre el gerente de ingeniería industrial y 5 representantes de los trabajadores de CCOO, lanzando acusaciones injustifi-

cadas y desproporcionadas sobre estos delegados porque bajaron a fábrica a verificar si se estaba haciendo una auditoría de tiempos encubierta sin previo aviso ni información a la representación legal de los trabajadores.

Este tipo de acciones es muy habitual en John Deere, es el día a día de una fábrica donde los representantes de los trabajadores, históricamente, participan y supervisan cualquier cambio, ya sea de método de trabajo o medición de tiempos que proponga la dirección. Es un orgullo contar con la excelente res-

puesta que siempre da la plantilla de John Deere, respaldando y apoyando a sus representantes, en esta ocasión acompañándonos en la masiva concentración del 19 de marzo, junto a compañeras y compañeros que estaban de ERTE, o que venían de otros turnos, o excompañeros jubilados. También queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los delegados sindicales de otras empresas que han acudido a apoyarnos a la concentración, en la que además intervino el secretario general de CCOO Industria de Madrid, Alfredo Villafraña.

Esta concentración es una de las medidas acordadas por todo el comité de empresa la semana anterior, tras conocer la comunicación por parte de la dirección de los expedientes contradictorios. Del mismo modo se decidió celebrar una asamblea masiva en el auditorio el miércoles anterior, así como llevar a cabo una concentración en la puerta, coincidiendo con la jornada de puertas abiertas de la empresa llamada «Siembra tu salud», a la que acudieron más de 100 personas trabajadoras que dijeron: «Siembra tus derechos», «Retirada de los expedientes», «Si tocan a uno, nos tocan a todos».

Gracias a la determinación y a la unidad demostrada, es importante señalar que los expedientes se han resuelto en los 5 casos con una amonestación por escrito,

sin llegar a suponer penas mayores. No obstante, dado que todo el Comité de Empresa ha señalado que los hechos imputados no son ciertos, consideramos que es un peligro que la dirección solo haya tenido en cuenta la versión de la otra parte, y que haya mantenido la calificación de falta muy grave, que no se archiva hasta dentro de 6 meses. Esto supone un intento de coartar el derecho a la libertad sindical, para impedir que realicemos las acciones sindicales que nos corresponden.

Por este motivo la mayoría del Comité de Empresa (CCOO y USO) decidió mantener la convocatoria de concentración para el jueves 19. Lamentablemente el día anterior y a última hora, UGT se desvinculó de la convocatoria de la concentración, comunicándonos al resto del comité su intención de no participar. Es preocupante que, cuando la dirección mantiene una sanción muy grave a varios delegados, UGT no sea capaz de mantener la unidad.

A pesar de las amenazas de la dirección sobre posibles consecuencias por asistir a una supuesta asamblea «ilegal» y pese a la retirada de UGT, la concentración fue multitudinaria. Queremos agradecer también a muchas personas afiliadas a UGT que hayan querido participar en la concentración a pesar de todo esto, demostrando también su valor y su apuesta por la unidad de los trabajadores.

Históricamente, en John Deere defendemos la libertad sindical, nos organizamos en asambleas del Comité de Empresa o de CCOO para informar y decidir entre los trabajadores y trabajadoras, cómo, cuándo y por qué motivo aplicamos la acción sindical que votamos entre todos. Luchar y defender los derechos de las personas trabajadoras, especialmente cuando se actúa con la mayor unidad posible, han sido las claves para conquistar y mantener las condiciones laborales, el convenio colectivo y el nivel salarial que tenemos, que no nos ha regalado nadie, y que ha costado mucho esfuerzo conseguir y mantener en duras y complicadas negociaciones.

En este momento tenemos los pedidos más bajos de los últimos 10 años y se ha prorrogado el ERTE por 3 años más. El año que viene es el último de vigencia del actual acuerdo de convenio y comenzará el proceso para negociar el próximo eligiendo la comisión negociadora. El Comité de Empresa ha solicitado a la dirección una reunión urgente para exigir la definitiva retirada de la consideración de falta muy grave a las cinco personas expedientadas.

Sonia Mandalón, secretaria general de la sección sindical de CCOO en John Deere Ibérica y Pablo García Cano, secretario del comité de empresa por CCOO.



El poder de lo privado, las autonomías y el derecho a conocer y utilizar el idioma

Viernes, 10 de abril de 2026

Korrika es un acto cultural privado que recorre el País Vasco oficialmente en defensa del euskera, organizado por dos entidades de la enseñanza privada financiadas con dinero público.

Por un lado, la segunda patronal en tamaño de la enseñanza privada denominada Federación de Ikastolas (ikastola se traduce como escuela a castellano) y AEK, una red de pequeños centros privados igualmente sostenidos por dinero público.

Ambas organizaciones nacieron en los difíciles tiempos en que era casi imposible aprender e incluso hablar en euskera, momentos en los que eran un verdadero movimiento popular.

En los años 90 la mitad de las ikastolas (unas 80 aproximadamente) fueron integradas en la red pública y otras tantas siguieron siendo privadas pero financiándose de fondos públicos.

Este año, estas dos entidades privadas que se financian con dinero público han roto la paz social expandiendo de la carrera popular llamada KORRIKA a CCOO.

El detonante principal han sido los recursos judiciales contra los perfiles lingüísticos en la administración pública presentados o apoyados por la asociación Euskara Denontzat que los organizadores de la Korrika sitúan en el entorno de CCOO.

AEK citó específicamente la suspensión de una OPE en el Ayuntamiento de Errenteria tras una impugnación relacionada con la exigencia del perfil CI (PL3) y en el mismo comunicado consideran que no se trata de intereses individuales aislados, sino de una estrategia «organizada y sistemática» para frenar la normalización lingüística en el empleo público.

La extraña maniobra ha puesto en la

picota a Sabin Zubiri, militante de CCOO, y a través de él a una asociación denominada «Euskara Denontzat» (euskera para todos) que venía denunciando judicialmente determinadas prácticas que impedían el acceso al trabajo o a determinados puestos de trabajo en base a la aplicación de los perfiles lingüísticos.

Nadie mejor que él para explicarnos qué ha ocurrido.

¿Qué es Euskara Denontzat?

Somos un grupo que nació en el año 2022 y que busca promover un debate propositivo sobre la política lingüística en Euskadi en clave pluralista. Nos centramos en la política lingüística para personas adultas en el ámbito laboral. Defendemos 12 propuestas concretas que buscan reformar el sistema actual para construir puentes inclusivos, reduciendo las barreras lingüísticas.

Medidas como la gratuidad de los euskaltegis, las liberaciones para su aprendizaje también en el sector privado, los títulos belarriprest, la superación de los macroexámenes-revalida del BEC, la exigencia proporcionada de perfiles lingüísticos. Todas las propuestas con sus explicaciones, datos y gráficos están disponibles en nuestra web <https://euskaradenontzat.github.io>.

¿Cuál es tu papel real en CCOO, de lo cual se ha hablado mucho?

Soy delegado sindical en la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde trabajo como técnico de Hacienda y no estoy liberado, sino que acudo a reuniones periódicas del comité de empresa, de la sección sindical y del sindicato, donde he colaborado en el sector local-foral y en temas de política lingüística y tributaria.

Además tengo otras militancias políticas y sobre todo sociales, como por

ejemplo, Euskara Denontzat, por un euskera sin barreras, un colectivo social donde coincidimos activistas de distinta afiliación sindical.

¿Sería correcto decir, como de hecho se dice, que en vuestro planteamiento ponéis por delante el acceso al trabajo y a partir de ahí poner todos los medios para que el euskera esté presente en la vida institucional y real de los vascos?

No, en nuestro planteamiento el derecho lingüístico básico a la atención en la lengua cooficial elegida por la ciudadanía es compatible con los derechos laborales de toda la población (euskaldunes, erdaldunes, belarriprest, euskaldunes ágrafos).

Nos llama mucho la atención el hecho de que nadie hable del carácter privado de organizaciones como AEK o la Federación de Ikastolas, y por tanto de la KORRIKA. Son entidades privadas, empresas que venden un producto.

¿Qué acción sindical hacéis en ellas?

Esas entidades son cooperativas con las que yo no tengo relación laboral, ni sindical.

¿No crees que en defensa de los servicios públicos debería abrirse un debate sobre los motivos para que organizaciones privadas que actúan de esta manera deban ser financiadas por dinero público?

Sí, considero que la privatización de tantas escuelas y euskaltegis está agravando grandes problemas sociales, entre los que destacaría la segregación escolar y laboral.

Además estamos subvencionando entidades que trabajan activamente contra las normativas vigentes a favor de la escolarización inclusiva y de un sistema proporcionado de perfiles lingüísticos.

Entrevista realizada por Mikel González

Andalucía: hay que revertir las privatizaciones en la sanidad

Las Mareas Blancas de Andalucía y las tres candidaturas de las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) han presentado unos puntos comunes sobre la sanidad ante las inminentes elecciones andaluzas.

La mayoría de esos puntos se basan en la ILP presentada por las Mareas, cuya tramitación, aprobada por el Parlamento de Andalucía, ha quedado aplazada por la convocatoria de elecciones. Pero se echa en falta una cuestión concreta: la reversión de las privatizaciones.

En Andalucía, no solo hay un crecimiento de las derivaciones a la sanidad privada con el gobierno del PP. Además, hay varias comarcas cuya asistencia sanitaria está entregada al 100% -en lo que a asistencia hospitalaria se refiere- a entidades privadas. Todas ellas se hicieron durante los gobiernos del PSOE y se mantuvieron cuando Izquierda Unida formó parte del gobierno andaluz.

La asistencia en la comarca sevillana del Aljarafe, de 350.000 habitantes fue encomendada en 2003 a un «Consorcio Sanitario», que asigna la gestión del hospital a la Orden de San Juan de Dios. Este acuerdo supone en 2026 un coste de 90 millones de euros.

Además, el Servicio Andaluz de Salud tiene un «concerto singular» que afecta a 5 centros de la empresa Hospitales Pascual: los hospitales de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Villamartín, Cádiz capital y Lepe, que supone que esos hospitales asumen la asistencia a todos los usuarios del SAS de las comarcas afectadas. Actualmente, el acuerdo, suscrito en 2022, supone un coste de 771 millones por 5 años.

La reversión de todas esas privatizaciones debe formar parte del programa de todas las candidaturas de la izquierda andaluza.

Luis González



Personalidades y colectivos exigen la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede ante la visita del papa a España

Javier Sádaba, Nieves Concostrina, Benito Zambrano, Nazanin Armanian, Leo Bassi, Javier Pérez Royo, Juan José Tamayo, Rosa Cañadell, Javier Ruibal, Julio Rodríguez, Lidia Falcón y una larga lista de escritores, académicos, artistas y activistas y colectivos sociales apoyan el manifiesto promovido por Europa Laica demandando el fin de los privilegios de la Iglesia.

Al centenar de personalidades de la sociedad civil se suma una larga lista de colectivos comprometidos con el laicismo y la neutralidad del Estado en materia religiosa, como Derecho a Morir Dignamente (DMD), Plataforma Recuperando, Fundació Ferrer i Guàrdia, Asociaciones de Ateos, Redes Cristianas, AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) y Red Laicista Europea. Todos ellos exigen en el manifiesto la derogación de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede.

El manifiesto lamenta que un "gobierno progresista" no haya abierto la puerta a "reformas profundas" y mantenga en pleno siglo XXI un tratado que consagra "privilegios para el catolicismo" y "erosiona la libertad de conciencia de la ciudadanía".

Estos Acuerdos de 1976 y 1979, considerados por la organización como una prolongación del Concordato franquista de 1953, son calificados en el manifiesto como incompatibles con un Estado verdaderamente aconfesional y democrático. Europa Laica denuncia que dichos

pactos mantienen privilegios injustificados y perpetúan una relación institucional que vulnera el principio de separación entre Iglesia y Estado.

La organización inicia una campaña de recogida de firmas dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de recabar un amplio respaldo social a esta reivindicación. La campaña fija una primera meta de entrega de firmas en el Congreso de los diputados para la fecha en la que está prevista una intervención del papa León XIV ante congresistas y senadores, una presencia de carácter institucional en la sede de la soberanía nacional que supone una inadmisión derivada confesional, que Europa Laica ya ha denunciado. La organización hace un llamamiento a la participación ciudadana y al apoyo de

todas aquellas personas y entidades que defienden un modelo de Estado laico, basado en la igualdad, la neutralidad institucional y el respeto a la diversidad de convicciones.

Manifiesto por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede Hacia un Estado laico

Creímos que un Gobierno de vocación progresista abriría la puerta a reformas profundas. Sin embargo, entre apoyos frágiles y el resurgir de viejos reaccionarismos, esas transformaciones no han llegado o han quedado a medio camino.

El tiempo de las excusas ha terminado. Lo que queda de legislatura

debe ser tiempo de valentía.

En pleno siglo XXI, España mantiene un Concordato con la Santa Sede bajo la denominación de Acuerdos de 1976 y 1979. Un tratado que consagra privilegios para el catolicismo y erosiona la libertad de conciencia de la ciudadanía. Que los fondos públicos sigan financiando al clero es un anacronismo. Que miles de millones de euros sostengan colegios católicos y el adoctrinamiento religioso en las aulas es una anomalía democrática. Que nuestras leyes educativas, fiscales y tributarias estén condicionadas por acuerdos internacionales con el Vaticano es una distorsión de la soberanía popular.

Los concordatos no son instrumentos neutros. Han sido, históricamente, herramientas de blindaje institucional en regímenes autoritarios como los de Hitler, Mussolini, Franco o Salazar. No es casualidad. Los grupos parlamentarios que hoy sostienen al Gobierno han defendido en sus programas la necesidad de derogar estos acuerdos. También el Parlamento lo ha reclamado en legislaturas anteriores.

No se puede hablar de una verdadera reforma educativa mientras este Concordato siga vigente.

No se puede garantizar plenamente la libertad de conciencia mientras existan privilegios jurídicos

verdaderamente democrático con una excepción confesional incrustada en su arquitectura legal.

Los Acuerdos de 1976 y 1979 son la última trinchera jurídica de los privilegios eclesiásticos. Y toda trinchera puede desmontarse.

Por todo ello, las asociaciones y personas firmantes exigimos al Gobierno que cumpla sus compromisos electorales e inicie de inmediato los trámites para la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.

España debe dar un paso adelante

Debe cerrar definitivamente una herencia del franquismo que ya no representa a una sociedad plural, diversa y madura. No pedimos privilegios para nadie. Pedimos igualdad. Pedimos neutralidad institucional. Pedimos libertad de conciencia real para todas las personas, crean lo que crean o dejen de creer.

La oportunidad existe. La responsabilidad también. Ya no hay excusas.

<https://laicismo.org/mas-de-40-organizaciones-y-100-personalidades-firman-un-manifiesto-por-la-derogacion-de-los-acuerdos-con-la-santa-sede/>



Asamblea por una vivienda digna en Sant Boi

El pasado 25 de marzo se celebró en Sant Boi una asamblea por el derecho a la vivienda que contó con la participación de 50 personas. Es la segunda asamblea abierta que se celebra, donde se plantearon las diferentes problemáticas de la población, que no son muy distintas a la realidad general, así como la respuesta organizada por parte de la ciudadanía.

En una población como Sant Boi, con alrededor de 90.000 habitantes, en los últimos 5 años se han construido 150 viviendas de protección oficial, todas ellas de alquiler. Estas viviendas se han construido el pasado año, de las cuales 110 se ofertan entre unos 700 y 1.100 euros al mes. Pese a esta medida, en la que la población no ha tenido los medios para saber el proceso de adjudicación, continúa la imposibilidad de asegurar el derecho a una vivienda digna. Decenas de personas explicaron sus casos, los cuales estaban marcados por la desesperación y la caída de sus condiciones de vida a causa de la crisis de la vivienda.

La necesidad de una nueva ley de vivienda que ataque cualquier forma de especulación y que ponga a dis-

posición los cientos de miles de pisos vacíos que se encuentran en todo el Estado fue una de las reivindicaciones que se plantearon y que estarán en la base de la lucha que queda por delante. En las próximas semanas se realizarán movilizaciones y acciones que marcarán el futuro de esa lucha.

Solo con la organización y la movilización acabaremos con la especulación y conseguiremos el derecho a una vivienda digna.

Víctor Iniesta



Calles llenas, aulas vacías Seguimiento masivo de la huelga de profesores en el País Valencià

El profesorado y trabajadores de la enseñanza pública de Valencia, Alicante y Castellón se han movilizado por la defensa de una educación pública de calidad y en condiciones dignas este 31 de marzo. Con la huelga, concentraciones y manifestaciones, profesores, trabajadores y estudiantes mostraron el rechazo a la política del Consell de PP-Vox que lleva a la destrucción de la enseñanza pública.

Los profesores y trabajadores de centros educativos secundaron mayoritariamente la huelga, con un seguimiento histórico y también hubo concentraciones durante la jornada en Valencia, Alicante, Elche, Castellón y en Benicarló, Betxí, Vall d'Uxó..., terminando en la tarde con gran manifestación que reunió a más de 20.000 en Valencia, 10.000 en Alicante y más de 4.000 profesores y estudiantes recorriendo las calles del centro de Castellón.

Algunos profesores manifestaban: «Han pasado Gobiernos de distinto color político, pero las cosas no han mejorado».

Los profesores llevamos reivindicando la mejora salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios con pérdidas desde 2010.

También denunciábamos la falta de mejoras en los centros e instalaciones

que dificulta la labor educativa y de calidad, con centros y aulas en malas condiciones para desarrollar con dignidad nuestra labor, que sufren también los estudiantes.

Otra de las reivindicaciones es acabar con la masificación de las aulas, con más de cuarenta alumnos en algunos casos.

Necesitamos urgentemente mejoras como reducir ratios, más y mejores instalaciones, más profesorado, recuperando las plazas recortadas, recuperar el poder adquisitivo de nuestros

salarios y el pago de salarios atrasados y pagos de mensualidades que se efectúan con retraso.

Necesitamos defender una educación pública, laica y de calidad y para ello o el Consell inicia una negociación real y sería para dar satisfacción a nuestras reivindicaciones o, convocaremos una huelga indefinida a partir de mayo, y otro tipo de acciones, como se han realizado hace unas semanas en Cataluña.

Corresponsal



Una exigencia democrática elemental: retirada del plan de ajuste en la Complutense

El rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, actuando como correa de transmisión del gobierno de Ayuso, aprobó el 17 de febrero un Plan Económico Financiero que impone los severos recortes que ya anunciamos en la nota publicada en el número anterior de Información Obrera. Además de que estos recortes recaen en un 80% en la plantilla, ya se está verificando su impacto en términos de cuestionamiento de que la universidad pueda desarrollar su función social.

En concreto, ya se ha conocido la eliminación de cuatro másteres, así como la cesación de la impartición de asignaturas optativas y la fusión de grupos que implica una masificación de las clases, con sus consecuentes efectos negativos en la calidad educativa. Este proceso

carece además de la transparencia imprescindible en cuanto a los criterios que lo rigen. La fórmula genérica rectoral habla de falta de viabilidad de determinados títulos, por baja demanda estudiantil o por considerarse no estratégicos o imprescindibles. A nadie se le debe escapar que, bajo estas expresiones se esconde simplemente la lógica mercantil que, como en otros ámbitos, niega los derechos democráticos, en este caso el derecho a la educación. Pero nada de ello se discute en los órganos de gobierno ni de representación. Como tampoco su antecedente directo, dado que este proceso ya se encuentra en marcha: como recoge el propio PEF, el número total de horas de clase se ha reducido este curso académico en 62.164 respecto al anterior.

Ante todo ello, se extiende un clamor: el rectorado debe retirar el PEF y posicionarse del lado de la defensa de la universidad, lo que implica, inexcusablemente, exigir al gobierno regional la dotación inmediata de todos los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad universitaria.

Este clamor tomará forma el próximo jueves 16 de abril con la celebración de un referéndum, cuya pregunta plantea si se está de acuerdo con la retirada del PEF. Pese a su carácter consultivo, el rector -democracia obliga- deberá alinearse con su resultado -previsiblemente de abrumadora mayoría por la retirada-; en caso contrario, su dimisión pasará a ser parte del clamor.

El domingo siguiente, día 19, se celebrará una manifestación de toda la enseñanza pública madrileña contra la política de infrafinanciación -que agudiza los recortes- y de privatizaciones, especialmente agresivas en Madrid, aunque no exclusivas de esta región.

No resulta exagerado afirmar que es la supervivencia de una universidad pública digna de este nombre lo que se encuentra en juego.

Por eso, ante tamaña amenaza, la resistencia no puede ser tímida, testimonial, sino que debe materializarse en la movilización tan contundente como sea necesaria, hasta el final, hasta ganar la legítima aspiración de estudiantes y trabajadores universitarios, así como del conjunto de la clase trabajadora. Si, como todo apunta, eso requiere parar la actividad con una huelga indefinida, tanto las coordinadoras universitarias como los sindicatos deberán dar un paso al frente, requiriendo asimismo el apoyo del conjunto del movimiento obrero.

X. A. M.



La huelga de docentes en Cataluña. Una masiva movilización.



Las huelgas convocadas entre el 16 y 20 de marzo paralizaron la actividad educativa en todos sus centros.

La convocatoria de las huelgas (porque lo fueron de carácter territorial en días sucesivos) y sus movilizaciones contrarrestaron la maniobra a ultimísima hora por parte de la consellera Esther Niuob Cidoncha del gobierno de S. Illa, proponiendo un pacto que solo fue suscrito por CC.OO. y UGT, y que solo supone el 20% de la representación sindical.

Si bien el acuerdo otorga un aumento del complemento salarial del 30% en cuatro años y destina recursos a la educación inclusiva y reducción de ratios, fue rechazado por los afiliados ante la consulta planteada por el sindicato mayoritario en Catalunya, USTEC. El rechazo alcanzó incluso a los propios afiliados de los sindicatos que lo suscribieron, participando en las masivas movilizaciones y en el éxito de la huelga.

La comunidad educativa mostraba, pues, su indignación por el largo estancamiento y ninguneo de la Generalitat a la demanda de sus reivindicaciones laborales, salarios insuficientes y falta de apoyos profesionales, que permitan desarrollar una educación de calidad y sostenible, incluyendo atención adecuada al alumnado con necesidades especiales, menos carga administrativa y mayor inversión educativa.

La situación actual lo es sumamente tensa. Por una parte, la consellera, que si

cede a las pretensiones de la USTEC, le entregará la victoria en las próximas elecciones sindicales. Por la otra, CC.OO. y UGT, que si bien han logrado arrancar algunas mejoras, han sido desautorizados por la comunidad educativa solo a un año de las elecciones y tratarán de demostrar que era el máximo acuerdo posible; y por otro último, la Ustec y otros sindicatos más corporativos, que deberán llevar a buen término las movilizaciones que les otorga la representación frente a la Generalitat que sigue sin presupuestos, y alegando que sin ellos no pueden ampliar la partida de Educación y así presionara ERC la firma de los presupuestos. Una ERC que, mientras gobiernó, tampoco fue capaz de desenrollar el conflicto.

Una vez más le corresponde a los trabajadores, en este caso los del sector educativo, poner los puntos sobre la íes; no se puede alegar falta de dinero cuando se invierte en la educación y en la sanidad privada, abandonando el sector público.

Deberán los sindicatos mayoritarios tratar de reconducir la situación hasta alcanzar las reivindicaciones; de no hacerlo ellos, lo harán otros. Abriendo el camino a sindicatos corporativos, dividiendo al movimiento obrero educativo y reconduciéndolo a espacios más cercanos a la derecha y ultraderecha.

Eva Clara

Multitudinaria manifestación contra la guerra en Valencia

Este 21 de marzo, veinte mil personas se han manifestado por el centro de Valencia contra la guerra. Habían sido convocadas en unidad por todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales del País Valenciano -PSOE, Compromís, EU, Podemos, UGT, CC. OO., Intersindical Valenciana, CNT, CGT, ACPV y otras docientas organizaciones, el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos e Información Obrera entre ellas.

La iniciativa se adoptó en una reunión mantenida 10 días antes por cerca de un centenar de representantes de todas las organizaciones obreras y democráticas. Aunque había distintas propuestas sobre la consigna central de la manifestación, se decidió que el lema fuera «No a la guerra», por ser la que hacía la unidad de las organizaciones presentes. Esto no impidió que en la manifestación cada organización llevase sus pancartas, sus cortejos y sus consignas.

En estos momentos, frente al horror del genocidio palestino, el caos, la muerte y la destrucción en Irán bajo un diluvio de bombas, unido a la conciencia de las repercusiones de la guerra sobre los trabajadores y pueblos, que ya se concretan en inflación y pérdida de condiciones de vida, el rearme sigue siendo la prioridad del Gobierno, aunque haya relanzado el «No a la guerra» que movilizó a millones en la guerra de Iraq. Y esto hace que se desarrollen múltiples movilizaciones dispersas por toda España.

Lo sucedido en Valencia debe servir para impulsar la unidad y la movilización a escala estatal. Todas las organizaciones obreras y democráticas deben tomar nota, reunirse y adoptar acuerdos unitarios para la movilización masiva: ¡No a la guerra!, en defensa de los derechos obreros y democráticos.

En el manifiesto leído al final, se condenaba la «alianza bélica entre Israel y Estados Unidos, responsables de la actual espiral de destrucción en el Oriente Medio y de la limpieza étnica sistemática del pueblo palestino», que «condena a la barbarie a toda la región ante la pasividad cómplice de la comunidad internacional», condenaba también «la agresión contra Venezuela, la asfixia económica a Cuba y la cronificación de la guerra en Ucrania», las bombas, decía, «no traen democracia ni libertad: traen muerte, destrucción y sufrimiento a los pueblos».

Las decenas de militantes sindicales y políticos que desde Valencia preparamos una delegación a la conferencia y el mitin del próximo 20 de junio en Londres, acudimos a la reunión unitaria inicial, y hemos apoyado y participado en esta manifestación, informando a otros compañeros de la realización del mitin contra la guerra en Londres e invitando a participar en los actos públicos que organizamos y tenemos convocados en preparación de nuestra delegación al mitin.

Blas Ortega



Madrid

Acto por el mitin de Londres en el Ateneo de Tetuán

Con la sala totalmente llena de público, unos 70 asistentes, el presidente del Ateneo, Enrique Borcel, explicó el carácter plural de dicho espacio en el que se integran militantes de Podemos, de Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar y el colectivo Argentina Soberana.

A continuación intervino Jesús de Blas, profesor de Historia jubilado, que

explicó el sentido del acto contra la guerra a partir del mitin y la conferencia que se celebró en París en octubre de 2025 y del que se prepara en Londres para el 20 de junio próximo. Señalando la importante participación de representantes de movimientos por la paz, sindicalistas y organizaciones políticas de Europa y de Estados Unidos, donde

el grupo Demócratas Socialistas de América (DSA) está volcado en la movilización contra la guerra y las políticas contra los inmigrantes del gobierno de Trump.

Seguidamente intervinieron sucesivamente: Xabier Arizabal, profesor de Económicas y miembro del CATP; Damián Rodríguez, portavoz estatal de COESPE, y Marilyn dos Santos, secretaria estatal de Feminismos de Podemos.

Además, en el acto se leyeron mensajes de apoyo de Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso de los Diputados; de Vicent Garcès, miembro de la corriente Izquierda Socialista del PSOE y exdiputado europeo; de Jordi Escuer, coordinador de Izquierda Unida (IU) Latina e integrante de Manifiesto por el Socialismo; de Jesús Escribano, secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid; de la Confederación de Asociaciones de Madres, Padres y Familias de Alumnos de Madrid (CONFAPA), así como de

la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR).

En el acto se recaudaron fondos para apoyar una delegación al Mitin de Londres y se recogieron más de 20 firmas de apoyo al mitin de Londres.

Muchos de los presentes ya habían firmado.

Corresponsal

Los organizadores recibieron un comunicado de Ione Belarra, diputada por Podemos en el Congreso

Saludo de Ione Belarra, diputada de Podemos

Queridos compañeros, queridas compañeras: Soy Ione Belarra y, en nombre de Podemos, quiero enviaros un saludo afectuoso y agradeceros la organización de este acto en el Ateneo en el día de hoy. Trataré de ser concisa. Creo que, frente a los acontecimientos que estamos viviendo en todo el mundo, frente a la ola reaccionaria y belicista, la tarea más importante que tenemos

Preparando la delegación al mitin de Londres contra la guerra

Sabadell

El pasado 26 de marzo, en el local de Podemos Sabadell, tuvo lugar una charla de presentación del mitin contra la guerra, las fuerzas que participan y cuáles son los objetivos.

Intervinieron los compañeros Antonio Roa, de Podemos Sabadell (que presentó el acto), Àngel Tubau por Información Obrera y J. A. Pozo, del Comité contra la Guerra y el Genocidio de Sabadell.

Se explicaron las consecuencias para la población trabajadora de la política de rearme que practican todos los gobiernos, y la necesidad de unir a todo el movimiento obrero internacional en torno al eje que forma parte de su tradición: No a la guerra, no a las políticas de rearme que siempre van en contra de la población trabajadora. Necesitamos los recursos económicos para reconstruir los servicios públicos después de años de recortes. Y esto es lo que hay que exigir a nuestros propios gobiernos.

Después del debate, algunos compañeros se mostraron interesados en asistir al mitin.

Por otro lado, se acordó celebrar un nuevo acto, preparado con propaganda por el barrio, para el que ya hay ya hay fecha: sábado 25 de abril a las 11 de la mañana en «La morada» sede de Podemos Sabadell.

Corresponsal

Valencia

El 25 de marzo, en la sede de Intersindical Valenciana, se realizó la presentación de la conferencia y mitin a celebrar el 20 de junio en Londres.

Participaron Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical; Vicent Garcès, excoordinado socialista; Àngel Tubau, del comité de redacción de Información Obrera, y Karin Jansen, portavoz de Insubmisibles contra el Rearmament.

Todos los participantes consideraron que los bombardeos sobre Irán tienen como objetivo el control de las rutas comerciales y del petróleo, imponer los intereses comerciales de las multinacionales estadounidenses, de los que Trump se beneficia personalmente, y destruir la soberanía de las naciones, como en Venezuela; destruir a los pueblos, como ha hecho y sigue haciendo Israel en Gaza y Cisjordania con el pueblo palestino.

La guerra también es social, líquida o pretende liquidar las conquistas obreras y democráticas para financiar el rearme.

La cuestión que se plantea es cómo ayudar al 70% de la población que se opone a la guerra. La respuesta que se dio es que solo con la organización y la movilización masivas.

El mitin y la conferencia de Londres pretenden ayudar a constituir un movimiento internacional que actúe en cada país contra la guerra, contra la economía de guerra. De ahí la importancia de preparar la delegación a Londres.

Por último, se señaló la crisis del imperialismo norteamericano y la creciente resistencia de los trabajadores y el pueblo en los propios EE. UU. contra la política de la administración Trump.

Corresponsal

Sant Boi

El pasado jueves de 19 de marzo se celebró en Sant Boi un acto de preparación de la delegación de la comarca del Baix Llobregat al mitin de Londres del 20 de junio. La crisis del capitalismo exige de la guerra, la falta de rentabilidad que ofrece la ausencia de conflictos armados para el gran capital hace que para el imperialismo la guerra sea una necesidad.

Este es el punto de partida de donde surgieron después las voces de diferentes militantes sobre la necesidad de ampliar la resistencia contra los planes del imperialismo y bajo qué forma.

El significado de Londres muestra lo que muchos militantes experimentados (y no tanto) hace tiempo anhelaban: la construcción de un polo de resistencia internacional contra el imperialismo con un programa de unidad y por las reivindicaciones.

Las diferentes organizaciones que estamos trabajando en este sentido ponemos en el centro de la lucha por las condiciones de vida y las conquistas de la clase obrera el «No a la guerra».

No solo por la paz, sino por todo lo que nos están arrebatando, por la guerra social que genera que nuestro Gobierno aumente el gasto militar dejando de lado el gasto social.

¡El 20 de junio todas y todos a Londres!

Corresponsal

Ugetistas por Palestina ¡No a la guerra!

El Comité de Ugetistas por Palestina, fiel a los valores fundacionales de la UGT:

1. Denunciamos con rotundidad la

ofensiva militar de los Estado Unidos y de Israel contra Irán

2. Expresamos nuestra plena solidaridad con las poblaciones afectadas y denunciamos tanto la represión interna como las injerencias militares externas. Las personas trabajadoras y sus familias son siempre las primeras víctimas de la guerra.

3. Exigimos un alto el fuego inmediato, una reducción efectiva de las hostilidades y la recuperación de la vía diplomática, con la participación activa de la sociedad civil.

4. Reclamamos el cumplimiento riguroso del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, así como el refuerzo de los espacios multilaterales, especialmente el papel de las Naciones Unidas como marco legítimo para la resolución de conflictos. Ya son demasiadas veces que este organismo permanece mudo o mirando hacia otro lado ante conflictos ilegales, lo que pone en cuestión su papel actual y futuro.

5. Instamos a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea, a no avalar ni tolerar actuaciones que puedan constituir crímenes internacionales. En este sentido, y como ha pedido el Gobierno español, instamos una vez más a que la Unión Europea rompa el Acuerdo de Asociación con Israel, con la que viene obligada por el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

6. Pedimos al Gobierno español que adopte medidas concretas para evitar cualquier contribución a la guerra, incluyendo la suspensión del comercio de armas con Israel.

7. Instemos al gobierno de Cataluña a reforzar su compromiso con la paz en los ámbitos internacionales en lo que participa.

8. Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los sindicatos y a las personas trabajadoras a implicarse activamente en la defensa de la paz, la justicia global y los derechos humanos.

Nos solidarizamos igualmente con los sindicatos de Irán y de los países de Oriente Medio, que, a pesar de las dificultades, continúan siendo un bastión en defensa de los derechos de la clase trabajadora y de las libertades fundamentales. Afirmamos nuestra solidaridad incondicional con la Federación Nacional de Sindicatos Obreros y de Empleados del Líbano y denunciamos la masacre cometida estos días sobre la población civil.....

Extractos del comunicado de Ugetistas por Palestina.

Ione Belarra

¡Grecia no debe involucrarse en la guerra!

Declaración del Comité de Soldados del Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales

El siguiente llamamiento está circulando en Grecia. Reviste cierta importancia en un momento en que el Go-bierno griego de Mitsotakis, al igual que los Gobiernos europeos (a excepción del primer ministro Sánchez de España), está involucrando a su ejército en la monstruosa agresión liderada por EE. UU. e Israel.

En Grecia, el ejército está compuesto mayoritariamente por reclutas, ya que el servicio militar es obligatorio.

Es frecuente que soldados uniformados participen en manifestaciones políticas. Así ocurre cada 17 de noviembre, fecha en la que se conmemora la represión del régimen de los coronelos contra el levantamiento estudiantil de 1973.

«Camaradas soldados,

Tras el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, la guerra se intensifica peligrosamente, abriendo la caja de Pandora en toda la región de Oriente Medio y en la nuestra.

No hay lugar para la indiferencia, la complacencia ni la pasividad.

El humo de la guerra ha cubierto nuestra vecindad y ha llegado a nuestras fronteras. Nuestro pueblo ya se encuentra en el ojo del huracán.

Las bases estadounidenses, en Suda, Alejandrópolis, Larisa y otros lugares, convierten a nuestro país en un objetivo en esta guerra.

Por eso exigimos que aquí mismo se cierren todas las bases extranjeras, y de inmediato.

Nuestro país no debe participar en esta guerra de ninguna manera.

El uso de nuestros aeropuertos, nuestros puertos, nuestras instalaciones militares y nuestro armamento para servir a los planes asesinos de Estados Unidos, la OTAN e Israel contra otros pueblos aumenta considerablemente los peli-

gros para nuestro pueblo y nuestro país.

Exigimos:

La retirada de las fragatas, los F-16 y las baterías de misiles Patriot, así como el regreso de los oficiales y suboficiales que operan fuera de las fronteras, para poner fin a toda participación en la guerra.

Ninguna implicación de las fuerzas armadas griegas, ni de su personal, tanto dentro como fuera de Grecia, en la guerra librada por Estados Unidos y la OTAN.

La guerra ya está siendo explotada por los monopolios y todo el sistema capitalista para aumentar sus beneficios, con precios que no dejan de subir, lo que crea graves problemas para el pueblo, pero sobre todo para nosotros, que estamos realizando el servicio militar.

Por todas estas razones, nosotros, los soldados que servimos en el KEED, como es nuestro pleno derecho, formamos un comité mixto para abordar los problemas generados por esta guerra devastadora, que se ha convertido en una lacra para nosotros y nuestras familias. En todas las prefecturas y todas las bases, estamos creando comités similares. Consideramos que es nuestro deber y lo proponemos a todos los soldados.

Además, como comité, exigimos a las administraciones información oficial sobre el desarrollo de la guerra. Exigimos el cierre de las bases extranjeras para no convertirnos en un objetivo.

Hacemos un llamamiento a todos los soldados que estén de acuerdo con nuestras propuestas para que se unan a nuestros esfuerzos».

México, los pueblos de España y el rey Borbón

Hay un proceso de acercamiento entre el Estado de México y el Estado español. El Gobierno considera que los guiños de ojo a México—incluidas recientes palabras del rey—reflejan la política del Estado español.

El acercamiento viene tras la ruptura producida en 2019, cuando el presidente de México, López Obrador, escribió al rey solicitando que pidiese disculpas por los desmanes cometidos por los conquistadores españoles. No hubo respuesta, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se negó a invitar al rey a su toma de posesión; Sánchez se negó a acudir porque no habían invitado a Felipe VI.

El Gobierno ha buscado un acercamiento primero con declaraciones del ministro de Exteriores: «Hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios». Luego con las palabras del rey en una visita imprevista a una exposición: «Hubo mucho abuso» en la conquista de América. México responde invitando al rey al mundial de

fútbol en junio y julio próximos, pero la presidenta mantiene que sigue esperando la petición de disculpas de la Monarquía.

El rey se explicó ante el embajador mexicano. A su entender las Leyes de Indias de la Monarquía española tenían un afán de protección de los pueblos indígenas, pero luego vinieron los abusos. Al parecer Felipe VI reivindica a sus antecesores Borbones que continuaron la explotación de América. Reivindica que los monarcas españoles conquistaron los pueblos americanos... ¡para protegerlos!

Parcida es la posición del PP, que se enorgullece de la conquista y de las injusticias.

Los pueblos del Estado español no son responsables de lo que hizo la Monarquía española en América. Son hermanos de los pueblos americanos y tienen que condenar la conquista y los abusos de los conquistadores.

10 de abril de 2026

La nueva Ley militar alemana

La nueva Ley de servicio militar alemana ha desatado fuertes polémicas en las últimas semanas, principalmente dentro del país, pero también en el resto de Europa, ya que Alemania siempre ha sido un espejo donde mirarse por parte del «europeísmo». Esta nueva Ley implica la introducción del servicio militar voluntario, con la intención de agrandar notablemente el número de soldados (de 184.000 a 260.000) y el número de reservistas hasta los 200.000. El Gobierno alemán sigue con la estela de medidas en favor del rearme y la guerra. El mantra de la defensa preventiva y la campaña de terror sobre un posible ataque inminente no ha servido para que las alarmas se activen entre las organizaciones obreras y la juventud.

Esta Ley aprueba que los hombres entre 17 y 45 años tengan que obtener una autorización por parte de las Fuerzas Armadas para estancias de más de 3 meses en el extranjero. Los hombres nacidos a partir del 2008, pese a que de momento el servicio militar sea voluntario, deberán pasar exámenes médicos y actitudinales obligatorios y quedarán todos bajo un registro de las Fuerzas Armadas.

Entonces, si el servicio militar es voluntario, ¿por qué la imposición de este permiso? Aquí está la clave del asunto, o más bien de la estrategia reaccionaria de imponer sobre las carnes de la juventud los planes del imperialismo. Hace escasos días, ante el vuelvo y la indignación de la población, el ministro de Defensa alemán, Boris

Pistorius, declaraba que «este permiso no será obligatorio en tiempos de paz». En este sentido, el canciller Merz indicaba que «sigue sobre la mesa la posibilidad de volver al servicio militar obligatorio. Si no se alistan suficientes voluntarios para 2027 no tendremos más remedio que hablar de un periodo de servicio obligatorio en el Ejército».

Si las cifras mediante el voluntarismo de la juventud alemana no salen, la obligatoriedad se impondrá. Merz justifica esta nueva Ley con la responsabilidad que tiene Alemania de tener el Ejército convencional más grande de Europa para contribuir a la defensa del territorio de la OTAN para defenderse de la amenaza rusa. Es decir, cumplir a rajatabla con las órdenes del Gobierno de Trump a cambio de seguir hundiendo a la juventud de su propio país.

El caso alemán es el resultado más claro de lo que el imperialismo quiere hacer con Europa y el carácter de la Unión Europea y sus gobernantes. Que la potencia más importante de Europa, como es Alemania, se pliegue a las exigencias de recortes sociales en pro del rearme y la militarización de la sociedad, debería disciplinar a otros gobernantes. Pero la juventud trabajadora está enfrente y está bien viva, la respuesta que debe recorrer toda Alemania y Europa es la oposición directa contra estas medidas. La lucha contra el rearme y el «No a la guerra» debe ser la principal lucha de las organizaciones de la clase trabajadora.

Víctor Iniesta

Semana Santa y República

Este año se cumplen 95 años de la proclamación de la II República en España.

Desde este periódico queremos hacer nuestra pequeña aportación a esa efeméride combinando la coincidencia con la Semana Santa de Sevilla, la resistencia y recuperación de la memoria y la situación actual de la lucha por la República.

No desde la negación del hecho social del fenómeno idólatra y pagano, sino desde la evidencia histórica.

Abril de 1931, el día 1 fue Miércoles Santo, la noche del 14 de abril unos manifestantes increparon al Cardenal Illundain y el monumento de una de las vírgenes de la ciudad sufrió daños por una pedrada, eran los años de gran presencia de UGT y sobre todo CNT en las fábricas y el campo, donde se dieron 150 huelgas sectoriales en la provincia. El rey Alfonso XIII tenía comprometida su presencia en la ciudad para asistir a los actos de conmemoración de los 400 años de la fundación del Gran Poder. Dos semanas antes ese rey subió a un tren con dirección a Cartagena para viajar a Marsella, no volviendo en vida a España.

Después la larga noche de la dictadura, que no por ello y dentro de la posibilidades de la situación no dejó de manifestarse de múltiples maneras la conmemoración del advenimiento de la II República, siempre fueron en el marco de la clandestinidad y bajo la represión. El régimen tuvo la necesidad de conmemorar el 1 de abril como «Día de la Victoria», con toda su parafernalia de desfile militar, mientras en muchos sitios «caían» los octavillos clandestinos.

Fue a la muerte del dictador, cuando con más fuerza se recuperó la memoria de aquel 14 de abril, y Sevilla ha sido una de las ciudades donde históricamente fueron mayores las movilizaciones por la República desde 1975.

José Gallego

Setmana Republicana

Por tercer año consecutivo se ha organizado la «Setmana republicana» en Sant Boi de Llobregat.

Este año han participado el Col·lectiu Cultural republicà de Sant Boi, ERC, E.U. y PODEMOS, CATP.



Como estos últimos años, la actividad ha consistido en la colocación de banderas republicanas por las calles principales y barrios, así como la elaboración de un comunicado conjunto en un acto convocado a la ciudadanía.



Dentro de la semana republicana, las organizaciones convocantes realizan sus propios actos en los que resaltan la proclamación de la República del pasado 14 de abril de 1931, no solo desde un punto de vista nostálgico, sino de organización y trabajo continuo para acabar con este régimen corrupto borbónico.

Así mismo este año se ha recuperado en nombre del localidad en todos los carteles y actividades siendo rebaudizado con el nombre de «Vilaoi»

Movilizaciones

Abril REPU BLI CANO 2026

HOMENAJE
a las víctimas del fascismo

Cementerio San Fernando
14 de abril
2026 • 12h

Sevilla por la República

ENCUENTROS
POR LA REPÚBLICA

- REPÚBLICA para una vida digna
- REPÚBLICA para la Paz

Pensionistas contra la guerra: de París a Londres, construyendo organización y participación

El grupo de Pensionistas contra la Guerra nace tras el Mitin Internacional «Contre la Guerre» celebrado en París los días 4 y 5 de octubre de 2025.

Aquel encuentro no fue un punto final, sino el inicio de una tarea consciente: organizar, coordinar y dar continuidad a una respuesta internacionalista frente a la guerra y el rearme.

La participación de una delegación de cinco pensionistas permitió no solo conocer de primera mano la situación internacional, sino también asumir desde Madrid una responsabilidad: dar continuidad a lo allí acordado. Desde entonces, en Madrid, hemos trabajado para que aquella experiencia no quedara en una declaración, sino que se transformara en organización real.

... están preparando nuevos recortes en pensiones, sanidad y servicios públicos para financiar el aumento del gasto militar ...

En cada reunión de la coordinadora hemos dedicado tiempo a informar, debatir y sacar conclusiones.

Hemos llevado este debate a distintos espacios públicos, vinculando siempre la lucha contra la guerra con la defensa de las pensiones y de los derechos sociales. Porque entendemos que no son luchas separadas: forman parte del mismo combate y no solo se trata de recordar, sino de actuar.

Ese trabajo dio un paso decisivo el 11 de marzo, con la puesta en marcha del grupo en el local obrero de la calle Desengaño. Más de treinta compañeros y compañeras participaron en una jornada que combinó debate político, intercambio y organización.

Tres ejes fundamentales

Bajo una consigna clara: «Ni un céntimo, ni un arma, ni una vida para la guerra», se abordaron tres ejes fundamentales:

En primer lugar, cómo la guerra im-

pacta directamente sobre las personas pensionistas.

Denunciamos que los Gobiernos europeos, alineados con la OTAN, están preparando nuevos recortes en pensiones, sanidad y servicios públicos para financiar el aumento del gasto militar. Las pensiones públicas se han convertido en un objetivo del

La guerra es negocio para unos pocos y destrucción para los pueblos

capital financiero, que pretende apropiarse de esos recursos para sostener a la industria armamentística.

En segundo lugar, se trasladó la experiencia internacional de París, donde 18 delegaciones coincidieron en una idea central: basta de guerras, basta de genocidios, basta de Gobiernos que sacrifican los derechos de la clase trabajadora. Los testimonios escuchados allí, fueron claros y contundentes. Desde Palestina, denunciando la opresión y el exterminio; desde Rusia y Ucrania, con activistas de ambos países unidos contra una guerra que no representa a sus pueblos; o desde distintos países europeos, donde crecen las movilizacio-

nes contra el militarismo. Todos mostraron una misma realidad. La guerra es negocio para unos pocos y destrucción para los pueblos.

No basta con denunciar: es imprescindible construir un movimiento amplio, coordinado y sostenido en el tiempo.

La conclusión es inequívoca: la guerra no es un fenómeno lejano. Cada euro destinado a armamento es un euro que se recorta de pensiones, de sanidad, de educación. La guerra destruye vidas, pero también destruye derechos y futuro.

En tercer lugar, reafirmamos la necesidad de organizar la respuesta. No basta con denunciar: es impres-



Concentración contra la Guerra, frente al congreso, COESPE

cindible construir un movimiento amplio, coordinado y sostenido en el tiempo

En ese sentido, el grupo Pensionistas contra la Guerra se consolida como una herramienta necesaria dentro del movimiento pensionista, abierta a la colaboración con sindicatos, organizaciones sociales y plataformas por la paz. Aprovechando la adhesión de la declaración de Fenasol Líbano y el apoyo sindical.

Un primer balance

El balance de estos meses es claro: hemos pasado de una delegación que acudió a París a un grupo organizado, con actividad regular, capacidad de intervención y voluntad de crecer. Hemos dado pasos reales en la cons-

trucción de una red que no solo informa, sino que actúa.

El próximo objetivo es Londres

En junio de 2026 se celebrará un nuevo encuentro internacional frente al Parlamento británico. Allí estaremos.

Paris fue el comienzo. Londres debe ser un paso adelante. Para hacer frente a la guerra con más organización

Si en París fuimos cinco pensionistas, en Londres seremos diecisiete. Es un salto cualitativo que expresa el compromiso y la determinación de seguir avanzando.

Pero no se trata solo de estar. Se trata de construir fuerza, de reforzar la coordinación internacional y de

contribuir a levantar una respuesta de la clase trabajadora frente a la guerra y el militarismo.

Paris fue el comienzo. Londres debe ser un paso adelante. Para hacer frente a la guerra con más organización, más unidad frente al rearme, más lucha frente al saqueo de los derechos sociales y porque no vamos a permitir que nuestras pensiones financien sus guerras.

Porque no aceptamos ni un recorte para alimentar la industria militar. Y porque tenemos claro que solo hay un camino: la solidaridad internacional y la lucha de la clase obrera, esté donde esté.

¡ Que viva la solidaridad internacional de los pueblos!

Ana P.F.

Auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, exigencia democrática.

El cumplimiento de la Ley por la Auditoría de la Seguridad Social llega al Congreso una vez más, tras años de movilización.

El próximo 15 de abril de 2026 marcará un nuevo hito en una de las campañas más persistentes del movimiento pensionista en el Estado español. Ese día, a las 12 horas, se registrarán en el Congreso de los Diputados más de 35.000 firmas físicas, 4.500 recogidas a través de la plataforma digital y decenas de mociones aprobadas por instituciones públicas y organizaciones sociales que representan a millones de personas.

No es un gesto aislado. Es el resultado de años de trabajo sostenido, de presencia constante en plazas y calles, y de una exigencia democrática clara: el cumplimiento de la Ley 21/2021, que obliga al Gobierno a realizar una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social entre 1967 y 2019.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), junto a plataformas como el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas y numerosos colectivos territoriales, ha mantenido viva esta reivindicación desde hace años. La hemeroteca habla por sí sola: entregas de firmas en noviembre del 2021, febrero de 2022, octubre de 2023, con cifras que superaron ampliamente las 300.000

adhesiones—, y nuevas recogidas en 2025. Un esfuerzo continuado que no ha encontrado respuesta por parte de los Gobiernos.

Lejos de ser un incumplimiento puntual, la negativa a realizar esta auditoría se enmarca en una práctica más amplia de opacidad sobre las cuentas públicas. Las denuncias del movimiento pensionista apuntan a mecanismos que han cargado sobre la Seguridad Social gastos impropios, mientras el Estado ha evitado reflejar como déficit propio determinadas obligaciones, generando una imagen distorsionada que

alimenta el discurso de la insostenibilidad del sistema público.

Frente a ello, la auditoría no es solo una demanda técnica: es una bandera política. Se trata de poner «negro sobre blanco» el uso real de las cotizaciones sociales y demostrar que el sistema público de pensiones de reparto es sostenible, desmontando así los argumentos que abren la puerta a su privatización.

Desde marzo de 2025, la campaña se ha reactivado con fuerza, retomando el impulso iniciado en 2021. Y ahora culmina en una nueva entrega en el Congreso, acompañada de una manifestación que partirá de la Puerta del Sol a las 11:30 horas. Una movilización que no solo busca visibilizar la reivindicación, sino también interpelar directamente a los grupos parlamentarios que en su día apoyaron la Ley y que hoy deben exigir su cumplimiento.

El 15 de abril no es el final de nada. Es una nueva estación en una lucha larga, sostenida por miles de personas que no han dejado de organizarse, recoger firmas y apoyos y salir a la calle. Una lucha que demuestra que los derechos no se deben perder, se conquistan y se defienden.

¡No a las guerras, no al rearme, sí a la vida y a los derechos!
¡Gobierno quien gobierna! Las pensiones públicas se defienden

Ana y Damian



Escudo social ¿para quién?

Las consecuencias económicas inmediatas de la guerra emprendida por la administración Trump y el gobierno Netanyahu contra los pueblos iraní y libanes, como en todas las guerras, quien las va a sufrir va a ser la clase trabajadora.

El Gobierno español presume de haber decretado el mayor escudo social y económico, por encima de todos los gobiernos de la UE. Cosa que a primera vista puede parecer cierto, pero que una lectura detallada no puede sino caracterizar de insuficiente y que, paradójicamente, a quien beneficia es a los especuladores del petróleo y el gas, que sin ningún rubor iniciaron antes que se aplicara, una subida de sus precios, y de los precios de la cesta de la compra en general.

Ha destinado en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio, 5.000 millones de euros que no deben sino contabilizarse como gasto militar del Gobierno porque, lejos de tomar medidas frente a los especuladores, va a ponerlos del erario, al que contribuímos todos.

Medidas como el bono, que sin duda son necesarias, lejos de intervenir topando el precio del gas y de la electricidad que evite la especulación que pudimos ver los primeros días, será sufragado por partidas que sin duda tenían

otros destinos.

Rebajas fiscales para las patronales, sobre todo las grandes patronales, reduciendo pues el ingreso que recibiría el Estado para cubrir otras necesidades públicas.

Entre ellas el tan comentado IVA para alimentos que difícilmente será revertido directamente al precio de la compra por cuanto, para aumentar sus beneficios, no lo descontarán del precio de venta al público del producto, como ya lo realizaron en el pasado. Y sin control alguno de los especuladores de supermercados por parte de los organismos gubernamentales.

No prohíben ni los despidos ni los protege, así como tampoco ha tomado medidas para proteger los salarios, como tampoco toma medidas para proteger a los inquilinos frente a las subidas de los precios de alquiler, ni prohíbe los desahucios ante la presión de los grandes inversores inmobiliarios.

No se puede afirmar que el gobierno Sánchez-Yolanda, no destinen dinero para la guerra, todo lo contrario, sólo que esta vez va a parar a las manos de los especuladores y las grandes empresas energéticas, cuyas inversiones y ansias de riqueza son las que provocan las guerras.

Miguel González

Sobre el IPC, los salarios y las pensiones

El indicador de referencia para actualizar salarios y pensiones es el Índice de Precios al Consumo (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo define como «una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España». Es, pues, una medida de la inflación.

Tiene un cálculo complejo en el que entran dos factores

1. La «cesta de la compra», es decir el conjunto de elementos de consumo (clasificados en 13 grupos), valorados cada uno en función del peso o proporción que tiene en el gasto de una «familia tipo», en un período de tiempo dado (un mes, un año, etc.). El INE utiliza para sus cálculos una cesta promedio, actualizada por el mismo en 2025, en la que la alimentación supone el 17,41% del gasto de una familia media y la vivienda, el 12,26%.
2. El aumento de los precios de cada uno de estos elementos en el período considerado.

cios de todos los grupos, ponderados cada uno por su peso o proporción en el gasto familiar, se obtiene el IPC medio del período, un 3% por ejemplo.

La vivienda como ejemplo

Supongamos que la vivienda se encarece un 20% en el período contemplado. Como supone el 12,26% del gasto familiar medio según el INE, su contribución a la subida del IPC es del 2,45% (el 12,26% sobre la subida del 20%). Esto supone que, si el IPC sube el 3%, el 2,45% de su subida se debe al encarecimiento de la vivienda y el

0,55% restante hasta el 3% se debe a la subida del resto de los productos consumidos por la población, según sus proporciones en la cesta de la compra media elaborada por el INE.

Veamos dos ejemplos para comprender cómo el IPC afecta de forma diferente a las clases sociales: el caso de un joven, un trabajador o pensionista con un salario o pensión bajos y un rentista o un empresario con altos ingresos. Al primero, pagar el alquiler y el mantenimiento de su vivienda, le supone el 60% de sus ingresos. Al segundo, mantener su vivienda le supone apenas el 5% de los suyos.

Continuando con los supuestos anteriores, el IPC sube un 3% y la vivienda el 20%. En el caso del joven con bajos ingresos, el incremento del gasto por la subida del coste de la vivienda le haría perder el 12% de su salario (el 60% de sus ingresos sobre el 20% del incremento del precio de la vivienda). En el caso del empresario, el aumento del gasto a realizar por la subida del coste de la vivienda sería de un 1% (el 5% de su renta sobre el 20% que sube la vivienda).

Simplificando, si de acuerdo con el IPC elaborado por el INE, ambos incrementan sus ingresos en un 3% (por la subida del salario o de las pensio-



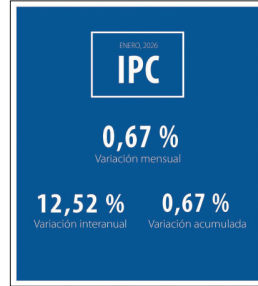
Manifestación de COESPE, subida de salarios y pensiones con el IPC

nes decretada por el Gobierno, en el primer caso, y por el aumento de sus beneficios en el otro), resulta que el joven trabajador y el pensionista han perdido un 9% de su poder adquisitivo (el 12% que suben sus gastos por el encarecimiento de la vivienda menos el 3% que aumentan su salario o su pensión); sin embargo, el rentista ha ganado un 2% de poder de compra (el 3% que aumentan sus beneficios menos el 1% que le supone el aumento de su gasto en vivienda), que podrá dedicar a aumentar su consumo o a incrementar su ahorro. Algo parecido sucede con el aumento del precio de los alimentos.

A modo de conclusión

No pretendemos con esto cuestionar el método de cálculo del IPC por el INE, que es en nuestro país el indicador de referencia para la inflación (aunque hay otros); sino señalar que ese indicador no es adecuado (y menos en una época de crisis, inestabilidad y guerra) para actualizar las rentas de una buena parte de la población, en particular la mayoría de los trabajadores con salarios bajos o medios y de los pensionistas (por ejemplo, según el INE, en 2023, el 37,1% de la población no pudo afrontar los gastos imprevistos).

Blas Ortega



Fuente: Índice de Precios al Consumidor

Al sumar el incremento de los pre

Financiar las necesidades urgentes



María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Jesús Gascón, enero 2026

La primera candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, pretende que en el Gobierno ha servido a Andalucía. Y así lleva una propuesta de presupuesto andaluz, basado en lo que arbitrariamente el Estado quiere ceder a Andalucía. Esto lleva al fracaso y de ahí su última propuesta en el Gobierno: reparar a cada autonomía un saco de euros, al margen de los presupuestos.

Cediendo a la imposición de Montero, el presidente socialista Illa presenta unos presupuestos basados en lo que el Estado quiere ceder a Cataluña. Pero consciente de que esto lleva al fracaso, al margen de estos presupuestos, propugna que en el futuro Cataluña recaude el IRPF.

Montero e Illa se callan lo que hace un año acordaron el Comité federal del PSOE (con la oposición de Montero) con ERC. El reparto arbitrario de dinero a las autonomías ha sido la ruina de Cataluña. Y, añadimos nosotros, la ruina de todas las autonomías. Dijeron que frente a ello, el pueblo catalán, y los demás pueblos tienen que movilizarse para recaudar ellos todos los impuestos, empezando por el del IRPF. Y luego darían al Estado lo que justamente le correspondiese (cosa que no hace el presupuesto vasco, que es un privilegio).

Esto debería ser el punto de partida para unos presupuestos que recogiesen las reivindicaciones urgentes. A partir de ahí, ordenar to-

das las necesidades. Pero ese punto de partida no ha sido utilizado. En el año transcurrido, la dirección del PSOE lo ha metido en un cajón, Illa lo ha dejado para más adelante, y ERC también han acabado por dejarlo para el futuro.

¿Por qué? Porque la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) recauda los impuestos, Hacienda tiene el dinero y lo cede a las autonomías. La presión de esa máquina es imponente. ¿No son los pueblos capaces de recaudar los impuestos? Sí, pero ninguno de los partidos que orientan a Montero, Illa o Junqueras tienen previsto movilizar a los pueblos para poner todas las instituciones boca abajo y que el dinero sirva para satisfacer las necesidades del pueblo, como terminar con las listas de espera. El Estado de las Autonomías no puede dar para más.

Si Montero reconociese la verdad del actual sistema ruinoso, en lugar de ser su defensor, podría derrotar al PP.

Pero difícilmente lo va a hacer defendiendo un presupuesto ruinoso como los del PP. Sería normal que el actual sistema lo defendieran los de PP, como el presidente andaluz.

Pero es un fraude que Sánchez e Illa y Junqueras oculten que el actual sistema recaudatorio es la ruina de todas las autonomías.

Manuel Cusó

Defendamos nuestro derecho al aborto

¡Ni un paso atrás! Entre la ofensiva reaccionaria y la trampa de las promesas institucionales

En los pasillos enmoquetados del Ayuntamiento de Elche, donde el aire huele a rancio y a pactos de despacho, se ha gestado una nueva traición contra nuestra clase

La aprobación de una moción que ataca frontalmente el derecho al aborto, disfrazada de «apoyo a la vida», es el último zarpazo de una deriva patriarcal que pretende convertir nuestra ciudad en el laboratorio de la reacción. Pero mientras la derecha local nos señala, en los despachos de Madrid nos venden «soluciones» de cristal. El debate sobre blindar el derecho al aborto en la Constitución suena a música celestial en los teledidrios, pero para las que sostenemos el mundo sobre nuestros hombros, suena a otra promesa vacía de un Estado que siempre llega tarde y mal.

La doble moral: El control de nuestros cuerpos como disciplina de clase

Este movimiento no es una cuestión moral, sino una ofensiva política. Mientras la inflación devora nuestros salarios y los servicios públicos se desmoronan, la derecha y la extrema derecha deciden que su prioridad es hostigar a las mujeres que deciden no ser madres o que no pueden permitirse el lujo de la crianza en un sistema que nos precariza.

Es la hipocresía de siempre: nos niegan el derecho a decidir, pero nos cierran las escuelas infantiles públicas y nos despiden por estar embarazadas. No nos engañemos: las ricas siempre han abortado y siempre lo harán. Esta moción va dirigida contra todas las mujeres trabajadoras. El control de la reproducción es el control de la fuerza de trabajo.

La trampa del «blindaje» y el fraude de la objeción

¿De qué nos sirve una frase más en una Constitución que solo se cumple cuando beneficia a los de arriba? Blindar el aborto en el papel es poco más que papel mojado si el aparato del Estado sigue permitiendo que nuestros derechos se desangren por la herida de la objeción pública por la política de guerra. La objeción como privilegio: En nues-



tros hospitales, se ha convertido en una huelga de celo encubierta por parte de élites médicas que cobran de la pública pero sirven a la ideología de la sotana.

El negocio del desvío: Cuando el médico «se lava las manos», nos mandan a clínicas privadas. El Estado paga, las clínicas se lucran y nosotras somos tratadas como mercancía desahogada, lejos de nuestros barrios y de nuestro entorno.

No queremos palabras grabadas en mármol constitucional mientras nos dejan desprotegidas. La libertad no se

pide por favor en los plenos municipales; se conquista en la calle y prueba de ello es la reacción del Gobierno prometiendo el blindaje.

No confiamos en la benevolencia del aparato judicial ni en los Gobiernos que usan nuestros cuerpos como moneda de cambio electoral. Lo ocurrido en Elche es la prueba de que ninguna ley nos salvará si no hay una organización fuerte detrás.

La soberanía sobre nuestro cuerpo es la primera trinchera de la lucha de clases. Por eso, frente a su moción reaccionaria y sus promesas institucionales de cartón piedra, exigimos:

- Aborto libre, seguro y gratuito garantizado exclusivamente en la sanidad pública.
- Fin de la impunidad de la objeción de conciencia: quien no quiera garantizar la salud integral de las mujeres no tiene sitio en un servicio pagado por la clase trabajadora.
- Expulsión de los rosarios de nuestros ovarios y de la patronal de nuestras vidas.

Desde los palmerales de Elche la consigna es clara: Garantizar los servicios públicos es garantizar nuestra libertad.

Colectivo de Mujeres Republicanas



El «antifascismo» y las preocupaciones de la inmensa mayoría

Me mantuve conectado al esperado debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián, moderado por Xabier Doménech. Los tres propusieron, en resumen, una estrategia de confluencia electoral, con el objetivo de frenar a la ultraderecha. Pero faltó algo fundamental: el cómo.

Frenar a la ultraderecha es, sin duda, una importante preocupación de los y las militantes.

Ahora bien, la cuestión es cómo conseguirlo. Porque, como han demostrado las elecciones en Castilla y León, donde la abstención obrera —especialmente entre los sectores más precarios y con bajos salarios— y la abstención juvenil fueron determinantes, vencer a las derechas exigiría movilizar a la población trabajadora que ha dado la espalda a los partidos de «izquierda». Y en ese debate a tres faltaron, precisamente propuestas que pudieran ilusionar a esos millones de trabajadores y trabajadoras.

Pongamos la vista en la situación real de las personas de clase trabajadora. Para una buena parte de ellas, la principal preocupación

es sobrevivir, llegar a fin de mes. Dos millones y medio de personas cobran el salario mínimo. Más de 3 millones de personas trabajan a jornada parcial en España. 850.000 son hijos discontinuos (casi la mitad -45%- de los con-

La destrucción de los servicios públicos supone una importante carga

tratos fijos discontinuos formalizados en 2024 fueron firmados por jóvenes menores de 30 años), que trabajan un 50% o un 60% de la jornada anual.

Para quienes se encuentran un poco por encima de esos niveles económicos, la cosa tampoco está fácil. La destrucción de los servicios públicos supone una importante carga para ellos. Tener que pagar por lo que antes estaba garantizado por un servicio público es un coste difícil de asumir. Pagar un seguro privado de salud, o un médico privado para no quedarse en una lista de espera, tener que gastar tres o cuatro mil euros para pagar una FP que antes era gratuita, porque no hay plazas en

la pública, tener que pagar un máster o una universidad privada para que sus hijos puedan tener una titulación universitaria, tener que gastar cientos de euros en combustible para ir al trabajo,



porque la especulación ha echado a la clase trabajadora de las ciudades. Esa población, que vive al día,

que no puede tener acceso a una vivienda, y que ve que nadie propone una salida inmediata y real a esa situación, no se va a como ver por el «antifascismo», que para ellos es un concepto vacío. Es más, para muchos, la demagogia de la ultraderecha empieza a calar.

La unidad por arriba para reparar los puestos y garantizarse los escaños no ilusiona a casi nadie.

Sin una propuesta concreta, basada en dar respuesta a las necesidades más elementales de la población, no es posible la movilización electoral de la clase trabajadora y la juventud.

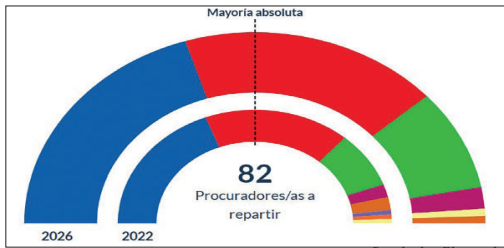
El dinero para satisfacer esas reivindicaciones existe, pero se está dedicando a aumentar el gasto militar, a mantener un aparato de Estado parasitario (jueces, militares, etc.) que, además, actúa al servicio de las derechas.

Pero, lamentablemente, la lucha contra la guerra y el gasto militar y la ruptura con ese aparato de Estado fueron temas que no estuvieron en ese debate a tres.

Luis González

Elecciones en Castilla y León

Algunas reflexiones sobre los datos



Las elecciones autonómicas en Castilla y León se han saldado con un aumento de votos del PP, un ligero aumento de votos del PSOE y de Vox, una caída de votos de las formaciones localistas (sube un poco Unión del Pueblo Leonés,

baja Por Ávila y se desploma Soria Ya), y una importante caída de las formaciones a la izquierda del PSOE, que se presentaron por separado. Hay que señalar que el PSOE, a pesar del ligero aumento de 14.000 votos, sigue estando

más de 100.000 votos por debajo de los que sacó en 2019.

Abstención obrera y juvenil

La abstención explica, en buena medida, los malos resultados de las izquierdas, una abstención que se ceba en los jóvenes: un 42% en los hombres de 18 a 24 años, un 38% en las mujeres de esa misma edad, un 35% y 32% para los hombres y mujeres de 25-44 años. Frente a un 19% en los hombre mayores de 65 y un 21% en las mujeres de esa misma edad.

La abstención ha sido mucho mayor en las ciudades de más de 50.000 habitantes

La abstención ha sido mucho mayor en las ciudades de más de 50.000 habitantes (33%) que en los pueblos de menos de 1.000 (22%). En barrios obreros de Valladolid o Burgos, la participación cayó hasta

10 puntos por debajo de la media autonómica.

La abstención ha tenido, también, un marcado sesgo de clase. Ha alcanzado un 45% entre los trabajadores precarios y desempleados, y un 37% entre la clase trabajadora, frente a 18% entre la clase alta y media-alta.

Pero el rechazo de la juventud y de la población trabajadora ha tomado también otra forma, un voto de protesta, el voto a la ultraderecha. Vox es el segundo partido más votado entre la población obrera (24% frente a un 38% del PSOE). También cosecha entre hombres jóvenes y de mediana edad sus mejores resultados.

Vencer a la derecha y la ultraderecha pasaría por conseguir que fueran a votar decenas de miles de trabajadores (sobre todo precarios) que se abstienen. Para eso hace falta otra política.

Héctor Lagar

¡Mazón a prisión!

Continúa la movilización

Miles de personas volvieron a ocupar las calles de Valencia exigiendo la renuncia al acta de diputado, al privilegio del aforamiento de Mazón, y su ingreso en prisión. Es la primera manifestación después de la decisión del TSJ-CV de no investigar a Mazón, y la 17.ª exigiendo responsabilidades políticas.

Es esta movilización, y las que le van a seguir cada mes hasta que los responsables paguen por el asesinato de las 232 víctimas, lo que va a determinar la situación. Así lo

expresaba el comunicado final de la manifestación: «conseguimos nuestro primer objetivo: la dimisión de Mazón. Pero continuamos movilizándonos porque el expresidente aún mantiene su acta de diputado, con todos los privilegios económicos y judiciales que ello implica. No nos conformamos con una dimisión a medias, ni con un nuevo Gobierno que busca la continuidad de las políticas que niegan el cambio climático, ignora los informes científicos y promueve la



especulación y las construcciones desmesuradas que se han hecho durante décadas, dejando aún más expuesta a la población. Ponen sus intereses personales por encima de la vida».

Y concluye: «¡Basta de dar la espalda al pueblo que quiere decidir su reconstrucción! ¡Basta de destrucción de los servicios públicos! ¡Basta de ofensiva contra nuestra lengua y cultura! ¡Basta de atacar a quien manifiesta su malestar y su dolor exigiendo justicia!».

En el manifiesto leído por los CLER se ha señalado que la guerra contra Irán es contradictoria con las reivindicaciones de la reconstrucción social que reclaman.

Blas Ortega



INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

Información Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Xabier Arribabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas Ortega, Josep Antoni Pozo, Àngel Tubau.

C/ DESENGAÑO 12, 1ªA 28004 MADRID
91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01

io@informacionobrero.org
www.informacionobrero.org



El 70% de los españoles rechazan la guerra contra Irán.

Según un estudio del CIS realizado entre el 2 y el 6 de marzo de 2026 en plena ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán:

El 85,4% de los españoles afirma que la guerra de Irán supone un riesgo para la paz internacional.

El 69,2% muestra mucho o bastante rechazo a la guerra iniciada por Trump y Netanyahu contra Irán, frente a un 24,5% que dice sentir «poco o ningún rechazo» por la misma.

«Cuba es la siguiente» proclama Trump



La llegada del petrolero ruso a la isla es un paliativo

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó a Cuba el 30 de marzo con 730.000 barriles de crudo. La Guardia Costera de EE. UU. recibió instrucciones de dejarlo pasar.

El presidente Donald Trump había

dicho el 27 de febrero a inversores de Arabia Saudí reunidos en Miami que «Cuba es la siguiente», tras celebrar las acciones militares en Venezuela e Irán. Tres días después justificó ante los periodistas la autorización del paso del buque ruso diciendo que «Cuba está acabada. Tienen un mal régimen. Que

Protestas tras las sanciones de EEUU consigan o no un buque petrolero no va a suponer ninguna diferencia».

Cuba no recibía ni una gota de petróleo desde hacía tres meses, desde el ataque militar a Venezuela que secuestró a la pareja presidencial y estableció una tutela sobre su Gobierno. Los expertos estimaban que la carga del petrolero ru-

Cuba no recibía ni una gota de petróleo desde hacía tres meses

so cubriría las necesidades energéticas de la isla solo durante un mes, y eso en las actuales condiciones de severo racionamiento adoptadas por el Gobierno cubano.

Recordemos que, al decidir bloquear el petróleo a Cuba el 29 de enero, Trump amenazó con aumentar los aranceles de importación a los países que no respetaran su orden ejecutivo. Pero, debido a la guerra en Irán, Trump retiró las sanciones sobre el petróleo ruso, lo que posiblemente influyó en la autorización de la llegada del petrolero a la isla.

Petróleo para Cuba

Sin embargo, la cuestión de fondo sigue vigente, ante el escenario de colapso económico por falta de energía, con apagones diarios, parálisis del transporte, escuelas y hospitales, lo que provoca una crisis humanitaria nunca vista en la isla, ni siquiera en los peores momentos del «período especial» de los años 90 que siguió al derrumbe de la Unión Soviética: es necesario garantizar el suministro regular de petróleo a Cuba.

Las acciones solidarias, como las del «Convoy Nuestra América» y las floti-

llas de activistas que llegan a La Habana, son bienvenidas, al igual que el envío de ayuda humanitaria de Gobiernos como el de Brasil —que envió 20 000 toneladas de alimentos, medicamentos y suministros— y el de México. Pero son medidas paliativas.

... el 28 de marzo, más de ocho millones de manifestantes cuestionan la política contra los inmigrantes y de guerra de Trump ...

Es necesario exigir a los Gobiernos, en particular a aquellos que se dicen amigos de Cuba y de su pueblo, como los de México, Brasil y Colombia, el envío de petróleo. Lo que implica, sin duda, una ruptura con la política de Trump, ante la cual estos Gobiernos llamados «progresistas» vacilan.

En un momento en que en EE. UU., el 28 de marzo, más de ocho millones de manifestantes cuestionan la política contra los inmigrantes y de guerra de Trump, hay que intensificar la presión sobre los Gobiernos para que rompan el bloqueo. La Federación Única de Petroleros (FUP-CUT) y la Federación Nacional de Petroleros (FNP) se han dirigido a la dirección de Petrosbras y al Gobierno de Lula reclamando el envío urgente.

Julio Turra

Miles de personas contra el racismo

El sábado 4 de abril, más de 10.000 personas se reunieron en Saint-Denis (93) convocadas por Bally Bagayoko y de La France insoumise. La plaza ante la basílica de los «reyes muertos» y el ayuntamiento estaba a rebosar.

La concentración surgió a raíz de la oleada de odio que ha sufrido el nuevo alcalde insuimiso, Bally Bagayoko, desde su elección

Y eso que era un sábado en pleno fin de semana de tres días y que el evento se había organizado en tan solo unos días. Los militantes y participantes que acudían en transporte público tuvieron que demostrar una gran determinación: ¡la línea 13 del metro se interrumpió, al igual que algunas líneas de autobús! Varios cientos de personas recorrieron kilómetros a pie para poder llegar hasta allí.

La concentración surgió a raíz de la oleada de odio que ha sufrido el nuevo alcalde insuimiso, Bally Bagayoko, desde su elección. Por el color de su piel, pero no solo por eso. «Un representante negro que quiere repartir la



Saint-Denis, 4 abril 2026

riqueza» (Mathilde Panot), que condena el cierre de aulas y que ha promulgado un decreto contra los desahucios que fue inmediatamente criticado.

Militantes, sindicatos, en particular los sindicatos departamentales y los colectivos, le han brindado su apoyo y estuvieron presentes. Pero también miles de habitantes de Saint-Denis, que por cierto no necesariamente habían votado en las municipa-

les, donde la abstención fue importante, pero que habían querido estar presentes, haciendo suya la defensa de Bally Bagayoko. Jean-Luc Mélenchon y Mathilde Panot estaban allí, rodeados de diputados y de los nuevos concejales electos de Seine-Saint-Denis e Île-de-France. Entre ellos, Eric Coquerel, Aurélie Trouvé, Carlos Martens-Bilongo, Aly Diouara y Jérôme Legavre.

En su intervención, Nadège Abomangoli, diputada de La France insoumise y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señaló la responsabilidad de Macron y de sus Gobiernos: «El tema es esta República enferma que fabrica el racismo de Estado con ministros que difunden noticias falsas contra Bally Bagayoko para llevarlo al redil, ¡pero no lo conseguirán! [...] ¡Con prefectos que se extralimitan y vienen a decirnos lo que tenemos derecho a decir o no, sobre todo cuando se trata de la violencia policial que siempre afecta a los mismos, a los negros y a los árabes! [...]». Bally Bagayoko saludó a los miles de personas que lo aclamaban, presentes «por el antirracismo, el antifascismo y la lucha contra el imperialismo».

¡Sois el orgullo de Francia! ¡Vamos a ganar esta lucha! ¡Resistencia!

Muchos presentes, pero también muchos ausentes: ningún miembro del Gobierno, empezando (y no nos sorprende) por la ministra encargada de la lucha contra la discriminación, Aurore Bergé, Olivier Faure, que tenía «compromisos anteriores», Fabien Roussel, visiblemente más ocupado atacando a Jean-Luc Mélenchon y a La

France insoumise durante todo el fin de semana, o incluso François Ruffin.

«Al menos ha quedado claro: Roussel y Faure acudieron a la manifestación policial de Alliance frente a la Asamblea Nacional y no son capaces de ir a una concentración en apoyo de un alcalde negro víctima de racismo. Una especie de prueba empírica de su verdad política». ¡No podemos sino compartir este comentario del filósofo Geoffroy de Lagasnerie!

Nadège Abomangoli también señaló la responsabilidad del Partido Socialista y de cierta «izquierda» en la situación actual. «Ha habido muchas renuncias también en nuestro bando político [...] Se han traspasado muchas líneas rojas. Recordemos la privación de la nacionalidad, la primavera republicana... Recordemos a quienes hablan de colonización a la inversa para referirse a los barrios populares [...]». Recordemos los panfletos sobre los rostros de la Somme en 2024 ».

En su intervención, Bally Bagayoko anunció una próxima manifestación a nivel nacional el 3 de mayo «que pretende extenderse por todo el territorio francés. Lo que nos importa es ser un punto de apoyo para una dimensión más amplia».

Rosalie Albani

Conferencia por la Paz y contra la Guerra



Bally Bagayoko

Resumen de mi discurso en la Conferencia por la Paz y Contra la Guerra (3 de abril de 2026)

Queridos camaradas: Esta noche, en la Bolsa del Trabajo de París, tuve el honor de dirigirme a ustedes en esta conferencia organizada por mis amigos y camaradas del POI (Partido Obrero Independiente). El tema urgente que nos une es claro: decir no a la guerra imperialista, no a los Gobiernos que fomentan el conflicto y no a esta carrera desenfrenada hacia una economía de guerra.

La única fuerza capaz de detener esta empresa mortal es la clase trabajadora, el pueblo, organizado, consciente y movilizado.

En todas partes se imponen las mismas opciones: austeridad para el pueblo, sacrificios en los servicios públicos, mientras los presupuestos militares se disparan. Nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros barrios se ven privados de recursos mientras financiamos armamentos y la lógica de la destrucción. Sí, los presupuestos se desvían para la guerra.

Reiteré que la solución no vendrá de los poderosos. La única fuerza ca-

paz de detener esta empresa mortal es la clase trabajadora, el pueblo, organizado, consciente y movilizado.

Nuestra responsabilidad es inmensa: sindicatos, organizaciones políticas que rompen con las políticas dominantes, activistas, debemos romper el muro de silencio que impide la acción.

... cuando el pueblo se levanta, puede obligar a los Gobiernos a dar marcha atrás ...

La resistencia debe comenzar desde la base, y ya está aquí. Las recientes concentraciones en Lyon, Nantes y esta noche en París lo demuestran: esta exigencia está creciendo.

También tuvimos el placer de recibir a compañeros de Gran Bretaña, del movimiento Stop the War. Su experiencia nos recuerda que cuando el pueblo se levanta, puede obligar a los Gobiernos a dar marcha atrás. Millones de personas siguen manifestándose hoy, especialmente en Londres, contra los crímenes de guerra y por la justicia.

Hice hincapié en la necesidad de construir un movimiento internacional decidido, capaz de detener la maquinaria de guerra. Y de ir más allá de la mera condena: debemos organizarnos, ampliar la movilización y unificar nuestras fuerzas aquí y en toda Europa. La paz no vendrá de arriba; vendrá de nosotros.

Finalmente, quise reiterar la postura de Saint-Denis: desde mi elección, nuestra ciudad ha sido un refugio, una ciudad aliada con sus habitantes. Si los jóvenes de mi ciudad son amenazados con ser enviados a la guerra, los apoyaré y diré: ¡No iremos! Los protegeré hasta el final. Y si es necesario, los esconderé. Lo que acabamos de demostrar con el decreto contra las deportaciones, lo demostraremos también contra el reclutamiento de nuestros niños.

Bally Bagayoko
alcalde LFI de Saint-Denis



Más que una guerra



Miembros de la Media Luna Roja atendiendo heridos tras los ataques

Este 8 de abril, horas después de la tregua firmada entre Estados Unidos e Irán por mediación del Gobierno de Pakistán, será recordado en el Líbano como el miércoles negro. Más de cien bombardeos sobre la población civil. Sunitas, chiitas, drusos, maronitas... todos los libaneses han sufrido la agresión brutal y genocida del ejército de Israel, ejército armado por los Estados Unidos y los Gobiernos europeos. La historia se repite: quieren aplicar al Líbano la suerte de Gaza y Cisjordania, transformar el Líbano en un desierto de destrucción. La responsabilidad de los Estados Unidos es total, así como de los Gobiernos europeos y la Unión Europea, sin duda la posición del Gobierno Sánchez brilla por su lucidez, exige suspender el acuerdo de asociación de la UE con Israel, aunque tarde, es mas que nunca necesario. Lástima que esta posición este empañada por la continuidad de la ayuda militar a la mafia de Zelenski, y al au-

mento descomunal del gasto de armamento en detrimento de las inversiones sociales.

Responder desde el movimiento obrero a la Fenasol, los sindicatos del Líbano, es una exigencia elemental, porque lo que está en juego para el imperialismo y su brazo genocida, el ejército sionista, es el derecho del Líbano a existir. Los ataques contra la población libanesa empezaron desde la constitución del Estado de Israel en abril de 1948. Y la resistencia libanesa se formó para defenderse de estos ataques.

Acabar con una civilización

Las palabras tienen un sentido. Volver un país a la edad de piedra no tiene nada que ver ni con la democracia ni con los derechos de las mujeres ni con la supuesta lucha contra la teocracia iraní (olvidando sin duda que esta teocracia fue instaurada en febrero de 1979 con la ayuda de los Gobiernos

occidentales para hacer frente a la revolución obrera y popular que acabó con el sah y su dictadura al servicio del las multinacionales del petróleo).

El balance de estos primeros 40 días de guerra contra Irán muestran el objetivo: miles de muertos civiles entre ellos 230 niños y profesores (del informe de la relatora especial de la ONU para la educación), 600 escuelas y centros educativos afectados, 30 universidades atacadas, el Instituto Pasteur, creado en 1920, arrasado, con el objetivo de acabar con la producción de medicamentos (Irán produce el 90% de su consumo), 131 sitios históricos y culturales atacados, decenas de mezquitas, el Gran Bazar de Teherán (patrimonio de la humanidad), 48 museos... La UNESCO había comunicado

Esto no es solo una guerra, es un programa de aniquilación.

No hubo ni errores ni daños colaterales, hubo y hay la voluntad de destruir.

las coordenadas de todos los sitios antes de los ataques.

Este es el futuro que el imperialismo quiere destinar a la humanidad a todos los pueblos, incluidos los trabajadores, y a todas las minorías oprimidas de su propio país.

Los imperios caen desde su interior

Junio de 2025, octubre de 2025, 28 de marzo de 2026, tres grandes jornadas de movilizaciones en miles de ciudades de los Estados Unidos. Empezaron por «NO KING» contra la deriva autoritaria de Trump, a esto se añadió «NO al ICE», la policía antiinmigración que persigue, expulsa e incluso asesina a los emigrantes y los que los apoyan, y después se transformó en «NO WAR», y la juventud salió por millones contra la guerra recordando Vietnam y las grandes movilizaciones

contra la agresión al pueblo vietnamita.

Una gran coalición de organizaciones, centenares de ellas formadas en los Estados Unidos, han coordinado sus esfuerzos para organizar la movilización. Y hoy las federaciones sindicales que participan en esta coalición plantean la necesidad de un 1 de mayo de combate (en EEUU no es festivo) y prepara la condiciones de una huelga general que aúne la lucha contra la guerra, el ICE y contra la inflación, los bajos salarios y la defensa de Medicare y demás conquistas sociales.

La política de guerra tiene un coste a todos los niveles. Trump quiere aumentar a 1,5 billones el presupuesto militar, es decir, un 40% más. Como comparación, China tiene un presupuesto de 275.000 millones, Alemania 65 y España 24 (en realidad unos 30).

Por eso Trump exige a todos los Gobiernos europeos multiplicar el presupuesto militar y, claro está, comprar armas estadounidenses (casi la única «industria» que no ha deslocalizado de Estados Unidos).

Y desarrollar esta política exige acabar con las formas de democracia parlamentaria, actuar al margen del Congreso y el Senado. Amenaza con anular las elecciones de medio mandato de noviembre; hace dimitir a la ministra de Justicia, Pam Bondi, porque no logró ocultar los papeles de Epstein; eliminó a los generales, entre ellos el jefe del Estado Mayor de tierra, que dudaban sobre la oportunidad de la guerra contra Irán.

Y al mismo tiempo, ante la movilización en Minnesota, tuvo que retirar la ICE y cesar a sus principales dirigentes.

Solo la movilización de los trabajadores y los pueblos

El recuerdo de Vietnam sigue vivo. El ejército norteamericano fue derrotado

políticamente por la movilización de la juventud y los trabajadores estadounidenses contra la guerra, junto con la resistencia del pueblo vietnamita.

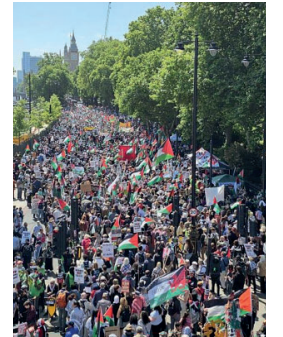
Biden hizo huir sus tropas de Afganistán después de 20 años de ocupación y «lucha» contra los talibanes para darles el poder a estos, ante la oposición mayoritaria a la guerra en Estados Unidos. Hoy más del 70% de

Ayudar a crear un movimiento de masas contra la guerra en toda Europa, partiendo del lugar más avanzado, como es Gran Bretaña, es la principal tarea.

la población estadounidense está contra la guerra.

El 28 de marzo se, manifestaron en Londres 500.000 ciudadanos contra la guerra, encabezados por STOP THE WAR, organización que junto con otras acoge en Londres los días 19 y 20 de junio una Conferencia y Mitin contra la Guerra para debatir y decidir acciones comunes contra la guerra y la austeridad.

A.Tubau - 10 de abril



Londres, 28 marzo

Una tutela imperialista para aplastar al pueblo palestino



Sede del PCHR en Ramallah

El Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza (PCHR) publicó el 30 de marzo un análisis del plan de Trump para Gaza. El PCHR describe el plan como «un completo desafío al derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las resoluciones de la ONU y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional», que «margina cualquier perspectiva de poner fin a la ocupación ilegal» de 1967, al tiempo

que «consolida la existencia y el control de la ocupación israelí sobre la Franja de Gaza». El PCHR señala que el dispositivo de gobernanza es un «régimen de tute» [...], «sin base democrática», que «se asemeja a un sistema de poder unipersonal» en el que «una autoridad casi absoluta recae en manos de Donald Trump a título personal», ya que el Consejo de Paz, el Consejo Ejecutivo, el Alto Representante y la Fuerza Internacional son todos designados o controlados por él. La Fuerza Internacional, «dirigida por Estados

Unidos [...] es la solución a largo plazo para la seguridad interior», para «operar junto a Israel y Egipto con el fin de asegurar las zonas fronterizas».

Desde la firma del llamado acuerdo de «alto el fuego» Israel ha matado al menos a 723 palestinos y ha herido a 1.990.

Cuatro meses después de su entrada en vigor, «no se ha logrado ningún alto el fuego efectivo», «la maquinaria bélica israelí sigue causando víctimas a diario».

Desde la firma del llamado acuerdo de «alto el fuego» a principios de octubre, los ataques israelíes han matado al menos a 723 palestinos y han herido a 1.990. «Hay víctimas que siguen bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y de protección civil aún no han podido llegar hasta ellas», siendo aproximadamente la mitad mujeres y niños. El texto concluye que la ocupación «mantiene —e incluso refuerza— unas condiciones que conducen a la destrucción total o parcial de los palestinos de Gaza», de modo que «los supervivientes no tienen otra opción viable que abandonar la Franja de Gaza» y que «ningún hecho sobre el terreno corrobora la confianza en el plan para poner fin al genocidio y al desplazamiento forzoso». El ejército israelí ha convertido el 60% del territorio de la Franja de Gaza en una zona bajo control militar exclusivo.

Por último, el PCHR subraya que el **... aceptar o asistir a la destrucción total de la Franja de Gaza ...**

Plan ha planteado un ultimátum: «aceptar o asistir a la destrucción total de la Franja de Gaza y a su desaparición del mapa». Las sanciones estadounidenses que afectan a las organizaciones humanitarias de Gaza, como el PCHR, Al-Haq, Al-Mezan y Addameer, ilustran una estrategia en la que «se impedirá operar a toda organización que critique el Plan de Trump o su aplicación».

François Lazar

¿Qué pintan los cascos azules en Líbano?

La ONU mantiene una misión, Unifil, en el sur del Líbano, que cuenta con 10.000 cascos azules desplegados, a lo largo de toda la frontera entre Israel y Líbano, y hasta el río Litani.

Entre esos 10.000 soldados, hay unos 650 españoles, cuyo despliegue cumple veinte años en septiembre de 2026, y cuesta a los contribuyentes entre 150 y 200 millones de euros al año (un total de 3.500 millones en esos veinte años), dependiendo de la rotación de tropas y las necesidades de renovación de material.

Según el mapa de la misión difundido por la ONU, los cascos azules cubren todo el territorio que hay entre la frontera y el río Litani. Pero ni han podido impedir que Israel invada esa zona, ni que masacre a cientos de civiles, ni que haya obligado a 600.000 libaneses a abandonar la zona.

Ahora, Israel anuncia que va a ocupar indefinidamente toda la zona de despliegue de la Unifil, que va a demoler todas las viviendas de la zona, y que va a impedir el retorno de los 600.000 desplazados.

Ante esa impotencia de la misión frente a los crímenes de Israel y la limpieza étnica que anuncia, una pregunta se impone: ¿qué pintan en el Líbano los cascos azules?

¿No debería el gobierno español retirar de inmediato a los 650 soldados españoles que exponen su vida, gastando el dinero del contribuyente para nada?

Corresponsal

Me abono a
INFORMACIÓN OBRERA

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE MANUEL CUSO - LA CAIXA E593 2100 2865 5813 0063 0460

6 NÚMEROS: 9 €

12 NÚMEROS: 18 €

24 NÚMEROS: 36 €

PDF, 24 NÚMEROS: 15 €



www.informacionobrero.org